

Estados Unidos Miradas críticas desde Nuestra América

#11
Mayo 2024

**América Latina y
Estados Unidos: entre
la resistencia y las
nuevas formas de
agresión imperial**

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO

Leandro Morgenfeld
Loreta Tellería
Juan Ramón Quintana
Jorge Hernández Martínez
Yazmín Bárbara Vásquez Ortiz
Olga Rosa González Martín
João Estevam dos Santos Filho
Tamara Lajtman
Aníbal García Fernández
Silvina Romano
Rafael R. Ioris

Boletín del
Grupo de Trabajo
**Estudios sobre
Estados Unidos**

Estados Unidos : miradas críticas desde Nuestra América no. 11 : América Latina y Estados Unidos : entre la resistencia y las nuevas formas de agresión imperial / Leandro Ariel Morgenfeld ... [et al.] ; Coordinación general de Loreta Tellería Escobar ... [et al.] . - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2024.

Libro digital, PDF - (Boletines de grupos de trabajo)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-766-7

1. Estados Unidos. 2. Geopolítica. 3. Imperialismo. I. Morgenfeld, Leandro Ariel II. Tellería Escobar, Loreta, coord.

CDD 306.09

PLATAFORMAS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Boletines de Grupos de Trabajo

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

Equipo

Natalia Gianatelli - Coordinadora

Cecilia Gofman, Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Sofía Torres,

Teresa Arteaga y Ulises Rubinschik

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina. Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Coordinadores del Grupo de Trabajo

Loreta Tellería Escobar

Comunidad de Estudios JAINA

Bolivia

loretatelleria@yahoo.es

Mariana Aparicio Ramírez

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional Autónoma de

México

México

aparicio.mariana@politicas.unam.mx

Leandro Ariel Morgenfeld

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

Argentina

leandromorgenfeld@hotmail.com

Coordinación del Boletín

Loreta Tellería

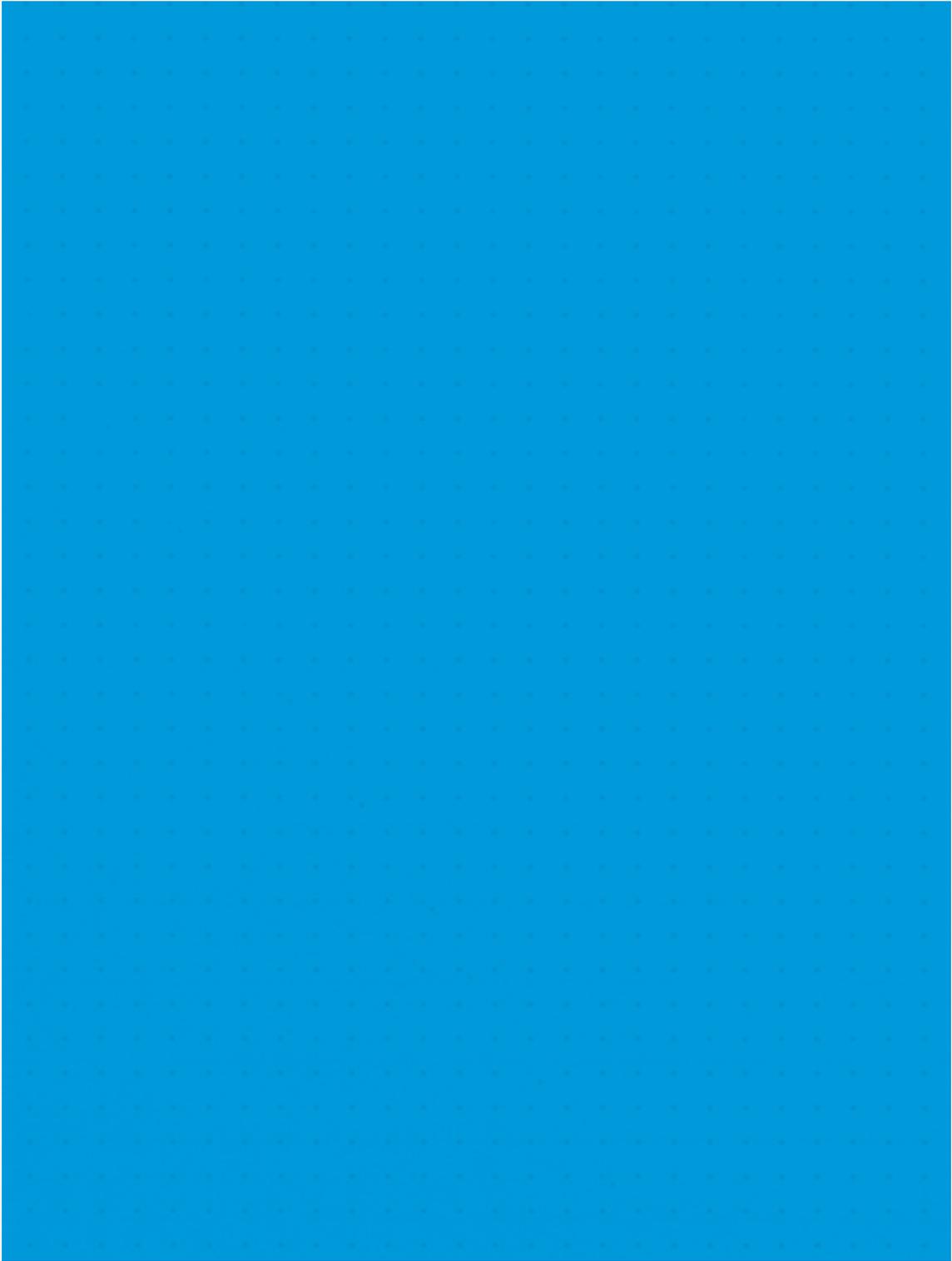
Juan Ramón Quintana





Contenido

- 5** 20 años del GT Estudios sobre Estados Unidos
[Leandro Morgenfeld](#)
 - 8** Presentación
[Loreta Tellería](#)
[Juan Ramón Quintana](#)
 - 15** Estados Unidos y las bases ideológicas de la geopolítica de la dominación latinoamericana
[Jorge Hernández Martínez](#)
 - 23** El Comando Sur y la construcción de estados-policiales en América Latina
[Juan Ramón Quintana](#)
 - 36** Estados Unidos: cambio de régimen, economía e imperialismo
[Yazmín Bárbara Vázquez Ortiz](#)
 - 43** El poder informacional de los Estados Unidos contra la Revolución cubana en sus 65 años
[Olga Rosa González Martín](#)
 - 51** Los cambios en la asistencia de seguridad de Estados Unidos hacia Colombia
[João Estevam dos Santos Filho](#)
 - 62** Tierra arrasada en Ecuador y el rol de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos
[Tamara Lajtman](#)
[Aníbal García Fernández](#)
[Silvina Romano](#)
 - 70** A Crise da Hegemonia dos EUA e o Papel do Brasil na Ordem Multilateral Emergente
[Rafael R. Ioris](#)
- 





20 años del GT Estudios sobre Estados Unidos

Leandro Morgenfeld*

Hace exactamente 20 años se formó, por iniciativa de Atilio Boron, entonces Secretario Ejecutivo de CLACSO, y por impulso del panameño Marco A. Gandásegui (hijo), el Grupo de Trabajo “Estudios sobre Estados Unidos”. Desde su fundación, el GT (compuesto hoy por 33 académicos de diez países) concentró su análisis crítico en comprender –y a su vez explicar desde una perspectiva latinoamericana y caribeña crítica y descolonizada– el modus operandi de Estados Unidos a través de tres líneas o ejes de trabajo principales: i) la crisis de la hegemonía estadounidense y su impacto global; ii) las fracturas económicas, sociales, demográficas y culturales al interior de ese país; iii) los cambios y continuidades en la relación con los otros países y gobiernos del continente americano.

Hasta ahora, el GT ha publicado seis libros propios: *Crisis de hegemonía de Estados Unidos* (2007), *Estados Unidos. La crisis sistémica y las nuevas formas de legitimación* (2010), *Estados Unidos más allá de la crisis* (2012), *Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional* (2016), *Estados Unidos contra el mundo. Trump y la nueva geopolítica* (2018) y *El legado de Trump en un mundo en crisis* (2021), coeditados por la editorial Siglo XXI de México y por CLACSO. Todos ellos están disponibles –en acceso abierto– en la página web de esta última institución. Dando

* Co-Coordenador del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios sobre Estados Unidos. Profesor Regular UBA. Investigador Independiente CONICET. Autor de *Nuestra América frente a la doctrina Monroe. 200 años de disputas* (CLACSO-Batalla de ideas, 2023). Dirige el sitio <http://www.vecinosenconflicto.com> TW: @leandromorgen

continuidad al trabajo del grupo, en este momento se está preparando un séptimo libro, que será editado conjuntamente con el Grupo de Trabajo CLACSO China y el mapa del poder mundial y presentado en el próximo Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Sociales (Bogotá, 2025). Además, desde 2019 se han publicado 10 ediciones semestrales del Boletín del GT, titulado “Estados Unidos: Miradas críticas desde Nuestra América”¹.

A lo largo de estas dos décadas, nuestro grupo se consolidó en torno a la hipótesis central de la crisis de hegemonía de Estados Unidos, cada vez más vigente y aceptada en los debates académicos y políticos. Gandásegui (h.), con la sensibilidad, pericia, audacia y, sobre todo, el compromiso político que lo caracterizó a lo largo de su trayectoria académica, supo vislumbrar la importancia de crear este colectivo, en un contexto particularmente incierto, marcado, por un lado, por el inicio de la llamada “posguerra fría” y, por otro, por la “guerra contra el terrorismo” desatada por la administración de George W. Bush. Su liderazgo fue crucial para el GT en la definición de una agenda amplia de trabajo y de una estructura organizativa capaz de garantizar su desarrollo. Además, otorgó al grupo la conducción, dirección, disciplina y capacidad de trabajo necesarias para convertirlo en un espacio genuino de reflexión, investigación comprometida y análisis crítico sobre Estados Unidos, desde América Latina y el Caribe, con proyección, incidencia y reconocimiento académico en la región, en Estados Unidos y en otros países del mundo.

Un cada vez más grande y valioso colectivo académico transnacional, en el que se encuentran algunos de los fundadores que acompañaron a Marco desde el inicio y otros/as que nos fuimos sumando en los años sucesivos, hoy seguimos construyendo pensamiento crítico. Agradecemos enormemente el compromiso y el apoyo que siempre nos brindó y nos sigue brindando la actual Secretaría Ejecutiva de CLACSO, especialmente

¹ Boletín #1; Boletín #2, Boletín #3, Boletín #4, Boletín #5, Boletín #6, Boletín #7, Boletín #8, Boletín #9, Boletín #10

Karina Batthyány, Pablo Vommaro y Natalia Gianatelli. Celebramos este año nuestro vigésimo aniversario, ratificando nuestro compromiso académico y político, e invitándolos a leer esta nueva edición del Boletín y a participar en los seminarios, conversatorios, congresos y publicaciones que impulsamos en cada uno de los centros miembros de nuestra red.



Presentación

Loreta Tellería*

Juan Ramón Quintana**

En las puertas del primer cuarto del siglo XXI, América Latina asiste a un escenario global cada vez más desordenado y violento, caracterizado por la expansión de conflictos armados regionales que amenazan prolongarse temporal y territorialmente con graves consecuencias para el equilibrio internacional. Al conflicto ruso-ucraniano se ha sumado el brutal genocidio sionista de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Esta atrocidad ha convocado la solidaridad de actores armados del Líbano y Yemen, junto con el apoyo de Irán contra la ofensiva de Israel, Estados Unidos y sus aliados, que amenazan incendiar Oriente Próximo. Las provocaciones occidentales en la región del Asia-Pacífico no cesan contra China, impulsadas por múltiples alianzas militares (OTAN y grupo de seguridad cuadrilateral, AUKUS o ANZUS) desde Washington o Londres. África, ha ingresado a este tablero geopolítico desde una perspectiva anticolonial en procura de frenar la histórica dependencia de países europeos, especializados en extraer su riqueza y sembrar la región de hambre, guerras tribales, migraciones y mayor dependencia económica.

América Latina no se exime de sufrir las consecuencias del desorden global, en medio del declive de la potencia hegemónica. Su bajo nivel de crecimiento económico, riesgo de estancamiento, mayor inflación y crónica desigualdad, amenazan con la estabilidad política y el incremento

* Co-coordinadora y miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Estudios sobre Estados Unidos y del Grupo de Trabajo de CLACSO Geopolítica, integración regional y sistema mundial, Bolivia.

** Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Estudios sobre Estados Unidos y del Grupo de Trabajo de CLACSO Geopolítica, integración regional y sistema mundial, Bolivia.

de violencia, factores que se cruzan con los efectos perversos de la conflictividad global. La región muestra aún señales de debilidad en su proceso de unidad e integración, frente a los imperativos y oportunidades para mejorar su inserción internacional, ganar espacio protagónico frente al capitalismo de guerra, la crisis climática o el riesgo de una conflagración nuclear sin precedentes.

Al parecer, los retrocesos sufridos por el arco político progresista en la última década, han servido de estímulo para afinar la contraofensiva imperial contra los pueblos de nuestra región, de la mano de nuevas formas de agresión, injerencia y militarización (lawfare, guerras híbridas o guerras de espectro completo). La región continúa siendo asediada política, económica y militarmente por Estados Unidos, cuyo objetivo no solo es recuperar su desgastada hegemonía, sino también dar fin con gobiernos no alineados con su política exterior, frenar la incursión extrahemisférica de potencias emergentes y competitivas (China, Rusia e Irán), promover acuerdos de libre comercio y garantizar el acceso fluido a nuestros recursos naturales estratégicos, de la mano de aliados políticos obedientes y funcionales a sus imperativos geopolíticos y económicos.

Venezuela, Cuba y Nicaragua continúan resistiendo las demoledoras sanciones unilaterales y el bloqueo de Estados Unidos, en medio de siniestras operaciones encubiertas, asociadas a la política de “cambio de régimen”. La política migratoria de Washington agudiza las tensiones sociales internas en las naciones centroamericanas, reforzadas por la remilitarización de la frontera mexicano-estadounidense, avivada por el racismo y xenofobia ultraconservadora. En la región del Caribe, área de secular disputa geopolítica, se reactivan estructuras militares neocoloniales bajo la tutela del Pentágono y la OTAN, en procura de controlar rutas marítimas, frenar flujos migratorios hacia el norte y asegurar su dominio hemisférico desde el Canal de Panamá y las numerosas bases militares en la región.

Sudamérica vuelve a ser foco de atención en el ámbito de la seguridad, debido a los cambios en la geopolítica de las drogas y el enfoque de la política norteamericana frente al fracaso del Plan Colombia. Petro y Lula, alineados en la defensa de la Amazonía, se estrellan contra el muro de hipocresía y doble moral de poderosos lobbies capitalistas, indolentes con las consecuencias de la crisis climática global. Con el nuevo gobierno ultraconservador de Milei, Argentina se encuentra en la ruta del vaciamiento estatal, apoyado por el gran capital, pero a su vez, enfrenta movilizaciones multitudinarias, con el ánimo de quebrar la radicalidad del proyecto fondomonetarista, encubierto por una pátina anarcocapitalista.

El aparente descontrol de la violencia carcelaria y el crimen organizado en Ecuador, que han puesto en jaque a los tres últimos gobiernos conservadores (Moreno, Lasso y Noboa), abren un insospechado camino a la conversión del país andino en una suerte de protectorado estadounidense, semejante al caso colombiano. La llegada del Comando Sur al Palacio de Carondelet en Quito fue instantánea, como la resolución de la Corte Constitucional, para otorgar insólitos e inconstitucionales poderes de guerra e impunidad a las tropas estadounidenses. Estas, tomarían al mando en la lucha contra el crimen organizado, a expensas de las fuerzas de seguridad nacional, condenadas a servir de eslabón colonial, papel cuestionado por el movimiento indígena ecuatoriano de la CONAIE.

Perú y Paraguay no están lejos de reproducir el mismo modelo de intervención militar y político de Estados Unidos semejante al de Ecuador, colocando a estos países en condiciones de “estados fallidos”, escenario propicio para consumir viejas aspiraciones de dominio y control estratégico tanto de las costas del Atlántico como del Pacífico, así como de sus cuencas hidrográficas más importantes.

El actor estratégico de la intervención directa e indirecta asociada a la reimplantación hegemónica, descansa en los hombros del Comando Sur. Su recurrente narrativa intervencionista, su arrogante exposición pública y las gestiones políticas de su comandante, Laura Richardson, expresa la

primacía militarista en la política exterior de Estados Unidos. De nuevo, América Latina enfrenta vientos de guerra interna impuestos desde afuera y esta tendencia, lejos de minimizarse, pareciera que tiende a expandirse en la región.

Este contexto, sirve como telón de fondo para poner en perspectiva y reflexionar sobre las nuevas y viejas estrategias de dominio estadounidense y de resistencia política y social, signada por los 65 años de la heroica resistencia del pueblo cubano a los múltiples intentos de destruir la revolución socialista, los 30 años de impostura democrática de la Cumbre de las Américas y los 70 años del primer golpe de Estado propiciado por la CIA contra el gobierno del Presidente Jacobo Árbenz en Guatemala.

El Boletín N°11 del Grupo de Trabajo de CLACSO Estudios sobre Estados Unidos, presenta en esta oportunidad siete artículos bajo el título: “América Latina y Estados Unidos: entre la resistencia y las nuevas formas de agresión imperial”. El primero de ellos, es el de Jorge Hernández, quien define a la seguridad nacional de Estados Unidos como soporte ideológico del sistema de dominación imperialista. El autor analiza cómo la política estadounidense hacia América Latina en materia de “seguridad nacional”, se transforma en un mecanismo de preservación de su hegemonía y estructuras de dominación, sustentada en tres históricos pilares ideológicos: la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto y el Panamericanismo. Mismos que en la actualidad, adquieren distintas manifestaciones sin perder su esencia hegemónica.

El siguiente artículo, profundiza el tema de la seguridad como eje ordenador del poder imperial ejercido por Estados Unidos en la región, a través del Comando Sur. Juan Ramón Quintana, aborda la creación de los estados-policiales como expresión última de las políticas de seguridad estadounidenses implementadas en América Latina, luego de una larga y sangrienta sucesión de guerras iniciadas desde el siglo XX, tales como la guerra contra el comunismo, el narcotráfico y el terrorismo. En esta perspectiva, la “Disuasión Integrada” sería una nueva forma de guerra,

con el objetivo transversal de mantener la hegemonía de Estados Unidos y frenar la presencia de China, Rusia e Irán en el hemisferio.

Por su parte, Yazmín Vázquez, escribe acerca de una de las manifestaciones de la estructura de dominación estadounidense, reflejada en el despliegue del sistema capitalista a través de mecanismos no sólo relacionados con actores e intereses económicos, sino con las propias estructuras estatales, corporativas, partidistas y sociales de Estados Unidos. De tal forma, que el trabajo conjunto entre el sector empresarial, sistema político y tanques de pensamiento, que tradicionalmente se denominó como cabildeo, actualmente adquiere la forma de Comités de Acción Política (CAP), con fines que abarcan, entre otras cosas, el “cambio de régimen” de aquellos países que van en contra de las reglas del mercado y la democracia liberal. Es el caso de Cuba y Venezuela en América Latina y el Caribe, entre otros. Lo que configura, en palabras de la autora, la preeminencia de un “Sistema de Dominación Múltiple del Capital y de la Guerra Híbrida”.

El cuarto artículo se relaciona, con uno de los instrumentos de la Guerra Híbrida que Estados Unidos despliega en la región, específicamente contra la revolución cubana, que cumple 65 años de resistencia. Olga Rosa González analiza las características del poder informacional del gobierno estadounidense frente a Cuba, que busca cumplir dos objetivos principales: prevenir/limitar la influencia revolucionaria en la región y el mundo, y socavar/derrocar al gobierno cubano. En este sentido, se aborda el rol que cumple la Agencia de Medios Globales del gobierno de los Estados Unidos y la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, los recursos que recibe y los objetivos y estrategias informacionales que despliega en más de un centenar de medios alineados con la estrategia desestabilizadora.

El caso colombiano es también objeto de análisis. Al respecto, João Estevam dos Santos, demuestra el lazo existente entre la asistencia en seguridad y la construcción de un orden social neoliberal. A través de lo que denomina un proceso de “pacificación”, explica cómo la cooperación

estadounidense estuvo dirigida en un primer momento, a la lucha contra los movimientos subversivos que amenazaban desestabilizar el proceso de acumulación del capital, expresado en el Plan Colombia (2000); y en un segundo momento, a la inclusión de las comunidades afectadas por la violencia, a las relaciones sociales de producción del mercado, proceso que se inició con el gobierno de Obama (2009) y continua actualmente con la implementación del programa Paz Colombia (2016).

La agresión imperial también se encuentra presente en Ecuador. Sobre el tema, Tamara Lajtmán, Aníbal García y Silvina Romano, argumentan en su artículo, por qué Ecuador se convertiría en “Tierra arrasada” frente al intervencionismo estadounidense. Este proceso que viene desde el gobierno de Lenin Moreno (2017-2021), hizo que el incremento de la violencia y el narcotráfico, junto con la reciente declaración de “conflicto armado interno” y de “Estado de excepción” del gobierno de Noboa, sean parte de un escenario premeditadamente armado por el gobierno de Estados Unidos para tener un control absoluto del territorio ecuatoriano. Los elevados niveles de asistencia en seguridad y militar, los acuerdos firmados por ambos países de sesión de soberanía en varios ámbitos, la presencia institucional estadounidense y las constantes visitas de altas autoridades políticas y militares de aquel país, son sólo los reflejos de tal situación. Bajo este escenario y de manera preocupante, Ecuador, se convertiría, en palabras de las autoras y el autor “en una suerte de base de operaciones para continuar la desestabilización regional contra Venezuela”.

Frente a este contexto regional, Rafael Ioris, aborda el papel de Brasil ante la crisis de hegemonía estadounidense en un orden multilateral emergente. Dicha crisis estaría promovida por la disminución del poder hegemónico de Estados Unidos en la gobernanza económica y política global, teniendo como principal factor desestabilizador el ascenso de China. El rol del presidente Lula y la reconstrucción de la imagen de Brasil, se reflejaría en una intensa labor internacional, relacionada con la intención de instaurar la llamada agenda del Sur, con temas que abarcan desde liderar

un esfuerzo de paz para la guerra en Ucrania, hasta la ampliación de los BRICS como un llamado al reordenamiento del orden mundial.

Como se podrá apreciar a lo largo de los artículos del Boletín, América Latina y el Caribe son víctimas nuevamente de una ofensiva por parte de Estados Unidos que tiene la característica de ser más descarnada. Su principal manifestación se encuentra en el despliegue de una Guerra Híbrida, que utiliza mecanismos renovados en materia de seguridad, de manejo de la información y de construcción de escenarios (tierras arrasadas), con el fin de conservar su hegemonía frente a un escenario de declive imperial. Por su parte, la región muestra una variada forma de respuestas ante la intervención estadounidense, expresada en la histórica resistencia del pueblo cubano, la sumisión activa y pasiva de gobiernos como Ecuador y Colombia, respectivamente; o, un renovado rol de Brasil bajo el gobierno de Lula con el objetivo de instalar una nueva agenda desde el Sur.



Estados Unidos y las bases ideológicas de la geopolítica de la dominación latinoamericana

Jorge Hernández Martínez*

A la memoria de Samuel Pinheiro Guimarães y su aporte al estudio de la hegemonía imperial

Las conmemoraciones históricas brindan la oportunidad de reconsiderar acontecimientos pasados a la luz del presente y en especial, tomando en cuenta su significación para el devenir. A la vez, mirar lo acontecido puede aportar claves para comprender mejor las tendencias actuales y sus perspectivas futuras. Es la dialéctica del conocimiento.

Teniendo en cuenta que en el año en curso coinciden conmemoraciones significativas para las relaciones interamericanas, es oportuno retener, mediante una breve retrospectiva, algunos hitos sobresalientes, haciendo bueno el propósito temático del presente número del boletín, al reflexionar sobre las nuevas y viejas estrategias de dominio de Estados Unidos. Se da continuidad, de cierto modo, a las aproximaciones de las dos entregas precedentes de esa publicación,

* Sociólogo cubano del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) y presidente de la Cátedra “Nuestra América” de la Universidad de La Habana. Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Estudios sobre Estados Unidos.

La narrativa con la que el pensamiento geopolítico de ese país considera como seguridad nacional --soporte ideológico del sistema de dominación imperialista y fuente de su funcional mimetismo--, tiene añejas raíces que sostienen la renovación cíclica del discurso y ejercicio gubernamental, los enfoques de la producción intelectual y el lenguaje de la prensa. En ello, la ideología desempeña un papel codificador de la política exterior norteamericana, asunto que no figura entre los asuntos que mayor atención reciben en los estudios académicos.

Las concepciones de seguridad nacional, base de la visión imperialista del mundo

Elemento constante, transversal, de la política latinoamericana de Estados Unidos, es la argumentación acerca de la necesaria defensa de la seguridad nacional --presuntamente amenazada por intereses externos o a causa de procesos internos en la región evaluados como hostiles--, y la omisión del verdadero propósito: la preservación de su hegemonía y estructuras de dominación. América Latina nunca ha sido definida como sujeto de su propia seguridad, sino cual objeto de la seguridad norteamericana. Ahí radica el eje ideológico permanente, que nutre las manifestaciones diversas con las que los gobiernos de Estados Unidos asumen a Nuestra América, a través de la retórica de sus gobiernos, los aparatos de la rama ejecutiva y del Congreso, las agendas partidistas, la producción intelectual de los *think-tanks*, los medios de comunicación tradicionales y novedosos, junto a los entes internacionales y multilaterales en los que el imperio impone su voz.

Esa ha sido y es el telón geopolítico de fondo de los reacomodos en los enfoques aplicados por demócratas y republicanos, liberales y conservadores, generalmente articulados en torno a tratamientos bilaterales basados en una misma ecuación, según la cual, la seguridad nacional es, en rigor, una función de la hegemonía. La mención al objetivo de preservar esta última se escamotea siempre, sustituyéndosele, en el mejor de

los casos, por la intención explícita de recuperar el liderazgo, la influencia y la confianza en el continente. Es todo un acto de prestidigitación ideológica.

Entre los principales factores que han determinado la historia y el presente de América Latina, ha sido, pues, la práctica geopolítica -imperialista y neocolonial- de Estados Unidos el de mayor estabilidad, profundidad y alcance en el desarrollo de los procesos de dominación que tienen lugar al Sur del Río Bravo. Mucho antes de que el poderoso Vecino del Norte se convirtiera en un gran poder, manifestó un fuerte interés por el resto del continente, perfilándose desde muy temprano como una amenaza para los países recientemente independizados, hace más de doscientos años.

La vocación geopolítica norteamericana se dejó ver, como concepción del mundo, desde el siglo XVIII, poco tiempo después de su formación nacional, una vez que las trece colonias fundacionales se constituyeron como estados del nuevo país. A la temprana expansión territorial, que ampliaría de modo gradual y creciente sus espacios geográficos, desplazando cada vez más la frontera hacia el Oeste y a áreas sureñas, se sumarían las apetencias continentales, en las primeras décadas del XIX, luego de concluidas las revoluciones latinoamericanas. De ahí que la frontera sea en la historia de Estados Unidos más una noción cultural, refrendada ideológicamente, que una delimitación geográfica.

Bajo los pilares ideológicos de la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto y el Panamericanismo en tiempos decimonónicos, se prolongaría la mitología del Excepcionalismo estadounidense y la Ciudad en la Colina, institucionalizándose el llamado sistema interamericano en el siglo XX. Las ideas implicadas tienen base en la tradición política liberal y las cosmovisiones teórico-filosóficas del pragmatismo, el positivismo y el darwinismo social, empalmando orgánicamente con los enfoques aludidos y el conjunto de instrumentos aplicados: manipulación política, intervencionismo militar, presión diplomática, penetración económica, influencia cultural y control mediático (Romano, 2020 y Morgenfeld, 2023).

El factor ideológico opera en un doble plano: por un lado, es el cemento que fija el consenso interno en Estados Unidos en torno a la necesaria defensa de la seguridad nacional y por otro, modela la plataforma doctrinal que orienta a la política exterior en similar dirección, confrontando amenazas. Ese factor hace pertinente y legítimo el empleo de la fuerza en toda su extensión, justificada a partir de los valores y principios que sostienen la cultura política, en lo que juega un rol fundamental -como se señala con acierto- “el valor simbólico de lo militar, su presencia en la vida cotidiana estadounidense”, junto a “la importancia económica y política de su complejo militar-industrial” (Tellería, 2023: 13).

En ese entramado se distinguen, en perspectiva histórica, los criterios confrontados que sobre el gobierno formalizaron prematuramente los llamados “Padres Fundadores” de la nación, a través de las dos visiones originarias -la federalista y la anti federalista-, integradas en una suerte de consenso o credo común, en los compromisos plasmados en la Constitución de Filadelfia. Ese núcleo ideológico tendría gran impacto, al conjugar las cuatro concepciones que nutren, desde un punto de vista teórico doctrinal, la proyección externa, basadas en las miradas de sus exponentes históricos emblemáticos: Jefferson, Hamilton, Jackson y Wilson. En muchos sentidos, enmarcan los contornos de la vida cultural y política norteamericana. Esas pautas han permanecido hasta el presente, a veces recreadas, sin desconocer la resonancia que han encontrado también las propuestas de ulteriores gobernantes, que han dado lugar a etiquetas basadas en sus apellidos, en las que América Latina ha sido objeto de atención en las miradas geopolítica globales (Hernández, 2023).

La Guerra Fría contribuiría de modo decisivo a darle forma en unos casos y a profundizar en otros, a un enlace entre visiones autóctonas con tradiciones de caudillismo militar -por ejemplo, en países de América del Sur-, y la formación de buena parte de la oficialidad castrense que ejerció tareas de dirección política gubernamental, que se efectuó en las academias de Estados Unidos que funcionaban tanto en la zona del Canal de Panamá como en su territorio continental, donde asimilaron dos núcleos

ideológicos: las concepciones de la estrategia internacional norteamericana, basada en el anticomunismo como eje de la bipolaridad geopolítica, y las concepciones de la seguridad nacional estadounidense, en su versión elaborada por el Colegio Nacional de Guerra. De las hipótesis de la escuela realista y los trabajos de sus exponentes en aquel tiempo, las academias militares y los Estados Mayores en determinados países sudamericanos, desprendieron enseñanzas con valor trascendente, que han sintonizado con visiones de la política exterior de Estados Unidos.

América Latina ante Estados Unidos: seguridad y geopolítica de la dominación

Nuestra América, ya se sabe, no solo fue el primer ámbito geográfico, desde el punto de vista histórico, objeto de la expansión territorial y económica, de las proyecciones geopolíticas internacionales y de las incipientes manifestaciones del carácter propiamente imperialista de la política estadounidense. La región fue, además, la primera en inspirar una formulación doctrinal de política exterior, el monroísmo, como complemento ideológico del proceso de expansión continental estadounidense hacia el Oeste, que extendería a la nación más allá de su propio espacio original, sobrepasando su frontera sur, aún antes de que se transitara de la fase pre monopolista del capitalismo hacia el imperialismo. En este sentido, las particularidades históricas del desarrollo del capitalismo en Estados Unidos condicionan su prematura o anticipada definición geopolítica, que suele completarse y acompañar en la historia a los procesos ulteriores, inherentes a la fase imperialista.

Y será de nuevo en América Latina donde, de nuevo, dos siglos después, se sigue evidenciando similar atención y accionar estadounidense, encaminado a proteger sus espacios de poder, evitando y revirtiendo, por un lado, las luchas independentistas, revolucionarias, anti neocoloniales y antimperialistas, y por otro, enfrentando la disputa hegemónica con potencias de otras latitudes. Ayer fueron España e Inglaterra, hoy son China

y Rusia. Desde este punto de vista, lo que tiene lugar es una reproducción ideológica cíclica de las formulaciones del Destino Manifiesto y una renovación recurrente de la narrativa que sostiene la Doctrina Monroe, a partir de lo cual se actualizan las concepciones que sostienen la dominación norteamericana en el continente y los instrumentos que la implementan, bajo paraguas cambiantes y variadas denominaciones, unas generadas por el propio imperio y otras por sus estudiosos: contrainsurgencia, guerra de baja intensidad, golpe suave, dominación de espectro completo, guerra híbrida y no convencional. La fórmula más reciente es la de la inquietante disuasión integrada, caracterizada, con razón, “como un enfoque expansivo, de dimensiones desconocidas, que desborda toda frontera convencional” (Quintana, 2023: 22).

Es ese el marco, justamente, en el que se encuadran las acciones intervencionistas directas de Estados Unidos, que acuden a la vía militar, incluyen invasiones con tropas, con formatos más abiertos o encubiertos, según el caso, y se complementan con expedientes desestabilizadores subversivos, que a veces apuestan más al empleo de la propaganda, los medios de comunicación, la cultura, la influencia ideológica y la guerra psicológica. Desde entonces, aunque no se utilizaba aún el concepto de Cambio de Régimen, ese era el objetivo. Tampoco se calificaba a los países involucrados con otro término en boga en el presente, el de Estado fallido, pero en esencia, estaba también incorporado, como visualización de una construcción teórico-ideológica que ganaría posterior presencia en la estrategia de dominación internacional.

El primero de esos actos -el que inicia precisamente el tratamiento de los procesos en la región en torno al citado eje geopolítico que se troquela alrededor de tema de la seguridad nacional, o expresado de otro modo, el acontecimiento que inaugura la concreción factual de la Guerra Fría en Nuestra América-, sería el golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz y abortó el proyecto nacionalista que intentó llevar a cabo. En la región, dicha guerra tendría una manifestación casi inmediata, en la medida en que, por un lado, el Tratado Interamericano de Asistencia

Recíproca (TIAR), aprobado en 1947, pocos meses después de proclamada la llamada Doctrina Truman, vinculó formalmente al mando y los entes castrenses latinoamericanos con los intereses de la política exterior estadounidense. Y por otro, la Conferencia Interamericana celebrada en Caracas en 1954, en vísperas de la invasión a Guatemala, acordó coordinar los esfuerzos de los Estados de la región para el combate al comunismo, como enemigo común.

La lectura de procesos como ese, evaluados como peligrosos para la seguridad nacional, es lo que ha llevado a su encuadramiento en concepciones funcionales, a los efectos de legitimar y apuntalar doctrinalmente la política latinoamericana de Estados Unidos, bajo determinadas circunstancias. Ante una escena como la que vive hoy América Latina, entre resultados electorales recientes y otros de próxima ocurrencia, con proyecciones inciertas, y dada la posibilidad de que los comicios en Estados Unidos reflejen más continuidad que cambio, en contubernio con oligarquías aliadas, no es ociosa la reflexión sobre el tema. La dimensión ideológica de la seguridad nacional, como eje geopolítico del quehacer imperialista, aunque siempre presente, se activa ante aquellos casos catalogados como críticos para su hegemonía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hernández Martínez, Jorge (2020). Geopolítica recargada: la dominación continental de Estados Unidos en el siglo XXI. *Universidad de La Habana*, 296, enero abril. La Habana: Universidad de La Habana.

Morgenfeld, Leandro (2023). *Nuestra América frente a la Doctrina Monroe. 200 años de disputa*. Buenos Aires: CLACSO.

Quintana, Juan Ramón (2023). Comando Sur y “disuasión integrada”. Tambores de guerra contra la Patria Grande. *Estados Unidos. Miradas críticas desde Nuestra América. Boletín del GT Estudios sobre Estados Unidos* Nº10, octubre. Buenos Aires: CLACSO.

Romano, Silvina (Coord.) (2020). *Truperialismo. La guerra permanente contra*

América Latina. Buenos Aires: CELAG y Madrid: Mármol-Izquierdo Editores.

Tellería, Loreta (2023). *Militarismo, el virus que Estados Unidos inocular en el mundo*.

Estados Unidos. Miradas críticas desde Nuestra América. Boletín del GT Estudios sobre Estados Unidos N°10, octubre. Buenos Aires: CLACSO.





El Comando Sur y la construcción de estados-policiales en América Latina

Juan Ramón Quintana*

El presente artículo pretende advertir y poner en perspectiva política, el controvertido papel que cumplió y cumple el Comando Sur en el alineamiento doctrinario y la subordinación política de los países de América Latina y el Caribe, en el marco de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. La imposición de las llamadas guerras contra el comunismo, las drogas y el terrorismo, asumidas como propias por las políticas de seguridad nacional de los países del hemisferio, con algunas excepciones, tienen hoy un nuevo desafío, el de asimilar el nuevo concepto de seguridad denominado “Disuasión Integrada” (DI). Este, apunta a enfrentar dos tipos de amenaza, por un lado, el crimen organizado transnacional, que mantiene el enfoque antidroga y antiterrorista, y por el otro, contener la presencia de China, Rusia e Irán en la región, etiquetados como “estados malignos”.

Para el Departamento de Defensa y el Comando Sur, ambos factores de amenaza, de manera indistinta y/o vinculada, tendrían un mismo objetivo; el de poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región en un contexto de declive de la primacía estadounidense. Desde una perspectiva crítica, éstas aparentes amenazas

* Sociólogo boliviano. Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Estudios sobre Estados Unidos. Investigador del Observatorio de Democracia y Seguridad sobre relaciones internacionales, seguridad y fuerza pública.

constituyen, más que una realidad objetiva, construcciones políticas deliberadas de seguridad, que tienen, de nuevo, la finalidad de legitimar la intervención de Estados Unidos en América Latina para preservar su hegemonía, tutelar su tradicional territorio extractivo de materias primas y mantener alineadas a sus fuerzas aliadas nacionales: clases dominantes, fuerzas políticas conservadoras y estructuras institucionales de seguridad. Como nunca, la incursión relevante de una potencia económica en ascenso como China, en el llamado hemisferio occidental, concebido tradicionalmente como patio trasero de los Estados Unidos, está modificando radicalmente su política de seguridad nacional colocando el acento en la remilitarización regional.

El énfasis que coloca la Disuasión Integrada, cuya responsabilidad de implementación regional recae en el Comando Sur, está dirigida a otorgar una gravitante centralidad a las fuerzas policiales y militares, pero al mismo tiempo a los sistemas penales y servicios de inteligencia de los estados aliados. Dada la brecha existente entre la percepción de amenaza asumida por Estados Unidos desde sus seculares intereses y las complejas realidades sociales y políticas de América Latina que exigen renovados enfoques sociales de la seguridad, la aplicación de la DI constituye un riesgo de alta intensidad. Coloca de nuevo a la región en un contexto de conflictividad y disputa geopolítica, a las democracias en peligro, socava la soberanía nacional y expone a la sociedad a enfoques represivos e instrumentales, exacerbando lógicas punitivas en desmedro de soluciones estructurales sujetas al Estado de Derecho. Se trata de un nuevo ciclo de remilitarización que otorga centralidad a la seguridad como núcleo de determinaciones externas.

Como contexto histórico y político, nos proponemos hacer un breve repaso a las políticas de seguridad dominantes de Estados Unidos en América Latina entre la segunda posguerra mundial y la primera década del siglo XXI, explorando sus objetivos, pero también sus consecuencias. Adicionalmente, analizaremos la nueva política de seguridad nacional estadounidense - DI -sobre América Latina, que estaría orientada

a promover más que estados de seguridad compatibles con realidades nacionales de naturaleza democrática, a construir estados policiales instrumentales que servirían a los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos. Esto, en circunstancias críticas, vinculadas a su pérdida de hegemonía global, al creciente multilateralismo y procesos de integración regional más autónomos, inspirados en oportunidades emergentes y resistencias populares crecientes.

Estados Unidos, guerra perpetua y guerras contingentes en América Latina

Desde su creación, Estados Unidos (1776) abrazó imperativos vinculados con la expansión territorial, patrones de supremacía racial y religiosa y la construcción de un poderío militar incontestable hasta adoptar la condición de imperio. Este, se construyó sobre la base de la conquista y saqueo de territorios, el sometimiento y esclavización de poblaciones y la sumisión de gobiernos o regímenes a sus intereses económicos, financieros y geopolíticos. El catalizador de todo este proceso de supremacía global fue, sin duda, su disponibilidad hacia una guerra permanente.

Una evaluación breve acerca de la llamada Doctrina Monroe (1823), concebida para proyectar su política exterior sobre el llamado hemisferio occidental, que acaba de cumplir dos siglos de vida, destaca una recurrente conducta intervencionista en asuntos internos de los países de América Latina, apoyado por el uso de la fuerza, más que de la diplomacia.

La Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha servido como uno de los instrumentos de poder y legitimación más eficaces para proyectarse externa e internamente. La eficacia de esta política discurrió en proporción a su capacidad de legitimación interna, al peso y poderío de sus armas, recursos tecnológicos, alianzas y estrategias de dominio, contención e imposición.

Durante las últimas siete décadas y al amparo de las políticas de Seguridad Nacional, América Latina sirvió como campo de batalla para alojar tres largas y dolorosas guerras imperiales, con consecuencias dramáticas para su desarrollo, integración y estabilidad: la guerra contra el comunismo, narcotráfico y terrorismo. Aunque con distinta intensidad, los intereses estadounidenses definieron nuestra geografía marginal, su trayectoria económica heterogénea, dispar y escasamente integrada, sus disputas políticas y su institucionalidad en seguridad, amén de sus instituciones y dispositivos militares nacionales.

Desde el año 2022, el gobierno estadounidense decidió promocionar en América Latina un nuevo concepto o doctrina de seguridad, denominada “DI”, en coincidencia con la toma de mando del Comando Sur por la generala Laura Richardson. Sin renunciar a la guerra contra el narcotráfico o el terrorismo, la DI amplía y define la esfera de amenazas, encarnadas en presuntos sujetos o corporaciones ilegales y naciones hostiles cuya connotación inscribe a la región en el conflicto global. Se trata de una estrategia que tiene un alto contenido y alcance geopolítico. En el primer caso, identifica al “crimen organizado transnacional” y en el segundo, a potencias emergentes como China, Rusia e Irán, cuya presencia en América Latina adquiere la forma de amenaza existencial para su seguridad nacional.

La DI inmersa en una concepción de guerra de espectro completo, exige el fin de la compleja constelación operativa y poco articulada de sus múltiples agencias sobre el terreno, cuyas capacidades potenciales se espera que multipliquen el efecto deseado al ser integradas. Es una estrategia de cierre de ciclo, pero a su vez, es una nueva que abre contornos geopolíticos críticos que comprometen el futuro de la región.

Dicho de otro modo, la DI, es un concepto cuyo objetivo es preservar la hegemonía global de Estados Unidos, capitalizando todo el poder disponible de forma convergente y coordinada. Este nuevo concepto supera, en sus fines y medios, a aquellos que sirvieron oportunamente al poder

estadounidense y configuraron, por una parte, estados militares, y por otra, estados de seguridad antidroga o antiterrorista de alcance limitado. A continuación, se realiza un breve repaso de cada uno de ellos.

Los hitos de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, previos a la Disuasión Integrada

- **La Doctrina de Seguridad Nacional o la guerra contra el comunismo**

Con la excepción de Cuba, desde su proceso revolucionario de 1959, Nicaragua con la Revolución Sandinista de 1979 y más recientemente, Venezuela con la Revolución Bolivariana de 1999, la mayoría de países latinoamericanos y caribeños, adoptaron la doctrina hegemónica de seguridad, sus percepciones de amenaza, programas y estrategias de implementación en un contexto que fue conocido como Guerra Fría (1947-1990). La asistencia en seguridad, cooperación militar y visitas periódicas de los jefes del Comando Sur a los países del hemisferio, sirvieron, desde hace más de medio siglo, como instrumentos de dominación e injerencia militar permanente. La amplia oferta de programas de entrenamiento militar, educación, profesionalización, adquisición de equipos y armas, realización de ejercicios militares y otros mecanismos de apoyo fueron modelando el patrón de tutelaje doctrinario sobre las fuerzas armadas latinoamericanas a lo que se sumó la construcción de bases militares de Estados Unidos en la región, especialmente en Centroamérica y el Caribe. El objetivo de esta estrategia de dominación militar de posguerra, además de adelgazar la influencia europea y desplazar su nicho de venta de armas, fue la de transformar a las fuerzas armadas en un poderoso aliado político frente a la supuesta amenaza comunista. De este modo, Estados Unidos disponía de un arsenal militar educado no solo en la cruzada ideológica sino también en la preservación y control político de un dilatado territorio sujeto al interés de las inversiones y explotación de sus recursos naturales.

Esta larga tradición de dominio militar neocolonial, se inscribe en el llamado sistema hemisférico de seguridad de posguerra (1947) que permitió introducir cambios en las políticas de defensa de los países de la región. Estados Unidos, inmerso en la disputa bipolar, impuso la Doctrina de Seguridad Nacional (DOSENA) como una inapelable guía ideológica anticomunista en los cuerpos armados de la región (Leal, F. 2002). La DOSENA, además de otros dispositivos ideológicos, produjo tres efectos determinantes: primero, modificó la política de defensa de los países de la región, trastocando sus hipótesis de amenaza externa por amenazas internas; segundo, redefinió sus objetivos institucionales potenciando la búsqueda y represión del “enemigo interno”, considerado como elemento perturbador para el progreso y modernización de las naciones; y tercero, la ocupación militar de los estados tuvo como correlato la captura de los sistemas económicos en favor de los intereses de la potencia dominante. El rediseño de la seguridad en las naciones del hemisferio, tuvo como soporte acuerdos bilaterales de seguridad mutua, el llamado Programa de Asistencia Militar (MAP), además del apoyo financiero del Punto Cuatro, del que se derivaron programas de Acción Cívica en el marco de la Alianza para el Progreso (Veneroni, H., 1971).

El comando militar de Estados Unidos para el Caribe (1947-1963), con sede en Panamá y luego el Comando Sur (1963-actualidad) contribuyeron a implantar la política de seguridad nacional estadounidense, que gravitó sobre la lucha contrainsurgente, colocando el acento en el “enemigo interno”. El comunismo no solo representó una amenaza militar, sino un riesgo civilizatorio que atravesó todos los tejidos institucionales y sociales de las naciones del hemisferio, derivando en el largo y cruento ciclo de dictaduras militares en la región. Éstas, sirvieron para implantar sistemas económicos que profundizaron las condiciones de dependencia, pobreza y marginalidad de América Latina. El resultado de la DOSENA, además de provocar miles de perseguidos, torturados o desaparecidos, fue establecer un “Estado militar” en América Latina, como gendarme del gran capital, a costa de su desarrollo y democracia.

- **Guerra contra las drogas**

Concluida la Guerra Fría, a principios de los años noventa, Estados Unidos modificó el eje doctrinario de la seguridad anticomunista por la nueva doctrina de seguridad traducido en la “guerra contra las drogas”. Se reintrodujo una nueva concepción de “enemigo global”, que aparentemente amenazaba la democracia y los derechos humanos, mediante la violencia armada, corrupción, lavado de activos o uso de armas ilegales. Se atribuyó al “nuevo enemigo”, capacidades operativas supranacionales que exigían la cooperación policial y militar de las naciones, en particular latinoamericanas. De nuevo, el gobierno estadounidense asumió el papel de adalid, en esta cruzada antidroga global, potenciando agencias de seguridad cuyo desempeño fue cuestionable. La cruzada antidroga sirvió para otorgar mayor gravitación a los imperativos de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, en su dilatada aspiración de controlar y ejercer dominio geopolítico en determinadas regiones del mundo, vinculadas a la posesión de potenciales recursos naturales estratégicos.

Con la presunción de que el narcotráfico y el crimen organizado transnacional desestabilizaba países, se avanzó en la teoría de “estados fallidos”, clave para justificar las llamadas intervenciones humanitarias en el sur global. En América Latina, la teoría de los “estados fallidos” sirvió para abonar la expansión de múltiples y variadas funciones del Comando Sur, en medio de la instauración de gobiernos neoliberales, sostenidos en el Consenso de Washington. Democracia, libre mercado y lucha contra las drogas, configuraron el telón de fondo de una cruzada moral y política en la región destinada al desmantelamiento estatal, impulsado por ajustes fiscales, privatizaciones, enajenación de recursos naturales y predominio de corporaciones empresariales extranjeras.

En este clima moralista contra el tráfico de drogas, las fuerzas armadas fueron convertidas en fuerzas policiales antidroga y las policías incrementaron su letalidad represiva contra la protesta social. Desde el Comando Sur se promovió la teoría conspirativa del “populismo radical”

o el “narcoterrorismo” en medio de su fracaso en contener el tráfico de drogas (Tokatlian, J. 2010). Paradójicamente, el llamado “populismo radical” tomó por vía democrática el poder, en cuyo ciclo gubernamental progresista se produjeron cambios económicos, sociales y políticos significativos que dieron al traste con el proyecto neoliberal en la primera década y media del siglo XXI.

La fallida estrategia antidroga comandada por la DEA y el Departamento de Estado, sirvieron de acicate para que el Departamento de Defensa y el Pentágono se responsabilizaran de esta tarea. La militarización de la lucha antidroga, promovida por el Comando Sur, que renovó el contenido y alcance de la asistencia en seguridad, produjo efectos perversos en las estructuras institucionales de la seguridad. El Comando Sur se convirtió en una verdadera fortaleza armada, adquiriendo poder y recursos, pero además, una influencia arrolladora en la región. Con el “Plan Colombia” y otros planes subregionales antidroga, los países latinoamericanos vieron mermadas sus democracias, sus estados de derecho y su propia seguridad, en tanto la militarización devino en violencia indiscriminada, autonomía corporativa, injerencia política externa sobre las instituciones estatales y afectación a la soberanía nacional. La lucha antidroga convirtió a militares y policías de la región en tributarios de la política de seguridad estadounidense y en un valioso aliado político que sirvió para frenar el avance de los movimientos sociales o intervenir en golpes de Estado contra gobierno democráticos progresistas.

- **Guerra contra el terrorismo**

Aunque la guerra contra el terrorismo comenzó en la década de los 80, bajo la presidencia de Reagan (1981-1989), tuvo su mayor impulso a partir de los atentados en territorio estadounidense, del 11/S del 2001. La conmoción global que produjeron los atentados permitió una abrupta transformación en la estrategia global de seguridad nacional de Estados Unidos, atizado por las ambiciosas posturas de las élites vinculadas con el Proyecto del Nuevo Siglo Americano (PNAC). Se modificaron leyes,

estrategias, enfoques e instituciones, además de recortarse derechos y libertades civiles en los Estados Unidos. Al mismo tiempo se adoptaron decisiones que convirtieron a Estados Unidos en una nación en guerra a lo largo y ancho del mundo, facilitado por el miedo que allanó la ofensiva de la OTAN sobre Medio Oriente.

La Estrategia Nacional contra el terrorismo, aprobada por el Departamento de Estado en febrero del 2003, tuvo un impacto moderado en nuestra región, pero ayudó a promover la ampliación de la diplomacia de seguridad actualizando normas, leyes y convenciones antiterroristas que supuso cambios en el concepto tradicional de la seguridad. La seguridad, desde el fuerte enfoque antiterrorista fue un dispositivo usado para múltiples fines. Se promovió la otorgación de inmunidad diplomática en favor del personal militar del área de defensa y seguridad de Estados Unidos y se impulsó la creación de fuerzas especiales nacionales antiterroristas, con equipamiento y armas estadounidenses para luego ser asimiladas en su capacitación y operatividad por el Comando Sur. La “doctrina preventiva” permitió redefinir a los grupos armados colombianos como terroristas e introducir, forzosamente, la idea de la presencia de presuntas células islámicas en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). Esto justificó la presencia ampliada de agencias de seguridad de Estados Unidos y la subordinación de diversas agencias de seguridad e inteligencia de la región.

Policías y militares, retomaron su papel de árbitros políticos, crearon organismos antiterroristas autónomos, radicalizaron su conducta autoritaria y violatoria de derechos humanos, alineándose a los dictámenes doctrinarios del Comando Sur. La guerra contra las drogas y el terrorismo se transformaron en poderosos instrumentos de injerencia política, intervención económica, financiera y judicial. El papel de las policías cambió significativamente, en abierta competencia con las tareas militares, en proporción al incremento de recursos destinados a la formación y entrenamiento policial. Su visibilidad y peso político no se dejó esperar,

intervinieron políticamente en tareas de desestabilización política y golpes de Estado (Ecuador, Bolivia).

Disuasión Integrada y guerras híbridas de amplio espectro

La remodelación de la política de seguridad de Estados Unidos en la última década, tiene su correlato con la crisis de hegemonía del capitalismo global, el debilitamiento de su capacidad económica, tecnológica y comercial, la emergencia de potencias competitivas y un regionalismo cada más vez acentuado, tendiente a la multipolaridad, que empuja a occidente a optar por el capitalismo de guerra como válvula de escape y exigencia del complejo militar industrial. Este contexto declivista, dio lugar a la llamada DI, como estrategia de amplio espectro, para la recaptura hegemónica global.

América Latina no ha sido ajena a esta crisis y transformación global de la seguridad. La formulación de la nueva doctrina de seguridad, traducida en la DI, promovida por el Comando Sur, por su Comandante, generala Laura Richardson, dice relación con su enfoque sobre la región, maltratada por los efectos corrosivos de más de dos siglos de aplicación de la doctrina Monroe.

La influencia económica de China, la presencia militar de Rusia y la incursión de Irán en la región generan dolores de cabeza al tradicional dominio estadounidense. Sin cortapisas, el Comando Sur le ha declarado la guerra a China, cuestiona severamente el papel que cumple Rusia en el campo de la información y en otras áreas, además de acusar a Irán de fomentar actos terroristas. El desembarco del Comando Sur viene acompañada sigilosamente de una mayor presencia de la OTAN, de sus socios europeos y la esmirriada institucionalidad diplomática hemisférica de la OEA.

La postura del Comando Sur, como nunca, se fijó metas rupturistas y lógicas de confrontación para cumplir sus objetivos, pero al mismo tiempo aplica la política de la zanahoria con sus aliados circunstanciales. La retórica de la guerra contra el crimen organizado transnacional opera solo como una cortina de humo que sirve para encubrir metas estratégicas como ocurrió con las políticas de seguridad precedentes en las que la región terminó perdiendo oportunidades, recursos y opciones de desarrollo.

Actualmente, el Comando Sur forma parte central de la política de restauración hegemónica de Estados Unidos en la región. Apostó por su explícito apoyo a proyectos conservadores y líderes proestadounidenses (Argentina, Ecuador, El Salvador, Brasil, Chile, Perú, Guatemala y otros) socavó la legitimidad de gobiernos progresistas mediante operaciones encubiertas (México, Colombia), optó por la política del palo y zanahoria con Venezuela, asfixia radical contra Cuba y Nicaragua y una relajada relación con Paraguay y Uruguay, en medio de negociaciones para el control militar de puertos e hidrovías, volcadas al Atlántico.

La DI para América Latina, encarna varios objetivos que deben ser observados en perspectiva global: primero, el retorno de la región a la confrontación, promovido por Estados Unidos, a partir del creciente poder económico de China y el poder militar de Rusia. Segundo, la presencia, por el momento con bajo perfil de la OTAN, hace presumir que la región, como en el caso Guyana-Venezuela- o en el Atlántico Sur, enfrentará reacomodos geopolíticos sobre la Antártida en el corto plazo, en el que Estados Unidos requerirá de aliados confiables con poder disuasivo. Tercero, el apoyo incondicional a las nuevas derechas, Argentina, Ecuador, El Salvador y el acentuamiento de las guerras híbridas contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, México y Colombia, hacen temer la militarización radical de la política. Cuarto, los acuerdos de seguridad, establecidos últimamente con Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú, y los que están en curso con Guatemala, República Dominicana y Jamaica, pronostican que

Estados Unidos no está dispuesto a ceder más de lo que perdió en las dos últimas décadas en la región.

Queda claro que en el caso de Argentina y con menor efecto el de Ecuador, cuyos gobiernos adoptaron una política de sumisión en favor de Estados Unidos, plantean tareas poco decorosas como lograr el bloqueo a los procesos de integración – CELAC, MERCOSUR-, debilitar la presencia de los BRICS en la región y servir de incentivo a otros países en la tarea de forjar relaciones carnales a cambio de “regalitos”, favorecimiento comercial o apoyo financiero para enfrentar las crisis económicas.

En suma: en los últimos años, la DI, aplicada por el Comando Sur en América Latina, funciona como un poderoso caballo de Troya que persigue un realineamiento por la vía coercitiva, dejando a su paso los incentivos tradicionales de la diplomacia convencional del Departamento de Estado. Las exigentes condiciones para la contención de las potencias extrahemisféricas parecieran funcionar cada vez más en el campo de la seguridad cuyo ajuste, por el momento, tampoco garantiza el éxito de la militarización política como es el caso del rechazo de varios países a la entrega de armas a Ucrania y la resistencia regional a obedecer la condena de la intervención militar de Rusia.

En este contexto, está claro que la política estadounidense apuntará a ganar aliados mediante su apoyo a gobiernos que conviertan la seguridad en una prioridad policial, respondiendo pragmáticamente a la guerra contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo se esforzará para que dichos gobiernos operen como gendarmes imperiales para impedir el despegue chino y ruso en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Leal, B. Francisco (2002). *La Seguridad Nacional a la deriva. Del Frente Nacional a la Posguerra Fría*. Colombia: Alfaomega-Ceso-Uniandes.
- Tokatlian, Gabriel, Juan (2010). La “guerra antidrogas” y el Comando Sur. Una combinación delicada. *Foreign Affairs, Latinoamérica*, volumen 10, Número 1, enero marzo.
- Veneroni, L. Horacio (1971). *Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de América Latina*. Argentina: Ediciones Periferia.





Estados Unidos: cambio de régimen, economía e imperialismo

Yazmín Bárbara Vázquez Ortiz*

La política de cambio de régimen, dirigida a los gobiernos no afines o en contradicción con los intereses de Estados Unidos, tiene un soporte estructural en el entorno del despliegue del sistema capitalista mundial y de la evolución de la esencia del imperialismo estadounidense desde finales del siglo XX y en el XXI. El enriquecimiento del sistema de dominación desde el que se concreta la disputa por el reparto económico, político y cultural del mundo, la disputa por mantener la hegemonía imperial, a través de la articulación de una cantidad creciente de recursos de poder, aporta al desarrollo de las que se han definido como guerras: psicológica, mediática, de cuarta generación, irregular, no convencional, cognitiva, económica, así como a esa diversidad integrada en lo que se ha clasificado como guerras híbridas para garantizar la dominación de espectro completo.

Como parte de este fenómeno, la capacidad creciente para influir, cooperar y controlar los entornos de regulación de las acciones de ciudadanos, organizaciones, gobiernos, a través de la ética, el conocimiento, las emociones, las leyes, las políticas públicas, las instituciones y los modelos de gestión, ha contado con la presencia creciente de elementos consustanciales a la economía: gremiales empresariales, corporaciones

* Profesora titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU). Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Estudios sobre Estados Unidos.

transnacionales, fundaciones y tanques de pensamiento asociados a las mismas, así como con organizaciones estadounidenses creadas para incidir desde este campo como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés). A la par, instrumentos económicos como sanciones, bloqueos económicos, comerciales y financieros, así como los tratados comerciales han jugado un importante rol en las disputas geopolíticas por el poder de Estados Unidos a escala regional y global.

En la base de la capacidad de integración de los elementos referidos en el despliegue de la política de cambio de régimen se ubica, desde los años 90 del siglo XX, la presencia creciente del interés económico de la clase capitalista estadounidense, y en particular del sector corporativo que lo gestiona, en el ejercicio del poder que se realiza a través de las estructuras del Estado, el gobierno y las formas de organización de la sociedad, en resumen, en la evolución del sistema político de ese país. Entre las vías utilizadas progresivamente para ello desde el siglo XX hasta hoy, pueden mencionarse la construcción y el desarrollo de mecanismos de influencia en estructuras de la rama legislativa a través del cabildeo, el acercamiento entre el sector empresarial y grupos de intelectuales organizados en universidades y tanques de pensamiento con funciones de consultoría y asesoría política para la formulación de políticas públicas, el “perfeccionamiento institucional y de formas de gobierno” y los financiamientos de campañas electorales, presidenciales y legislativas, denominado financiamiento político (Vázquez, 2021).

La Comisión de Elecciones Federales y OpenSecrets nos revelan los montos de dinero que se manejan en este entorno, los diversos sectores del capital que constituyen sus fuentes, así como sus destinos, entre otros elementos. Para OpenSecrets, el financiamiento político cualifica una interacción diferente de los sectores que representan el interés de la clase capitalista en el mecanismo de la democracia representativa, en tanto: “el voto de un individuo conlleva la expectativa de que el candidato velará por los intereses de los electores si es elegido, una contribución

de campaña puede conllevar la expectativa de que el dinero se reembolsará en forma de legislación favorable, regulaciones menos estrictas, nombramientos políticos, contratos gubernamentales o créditos fiscales, por nombrar algunas formas de reembolso” (OpenSecrets, 2023). Todo lo anterior, ha multiplicado la posibilidad de la clase capitalista estadounidense para participar en la construcción de la política exterior, sus instrumentos y modos de legitimación.

La Comisión de Elecciones Federales (2023), revela la tendencia creciente del financiamiento de origen corporativo en las elecciones presidenciales y de los miembros del Congreso y el Senado en Estados Unidos. El financiamiento se realiza a través de comités de campaña autorizados por candidatos particulares para recaudar y gastar fondos en sus campañas; comités no partidistas, algunos de los cuales pueden estar patrocinados por corporaciones, sindicatos, grupos comerciales o de membresía, etc.; comités de partidos políticos a nivel nacional, estatal y local; grupos e individuos que solo realizan gastos independientes como corporaciones, sindicatos y otras organizaciones que realizan comunicaciones internas de personas naturales y a través de los Comités de Acción Política (en adelante CAP).

Durante el gobierno de Barack Obama, el proceso referido se concretó en las proyecciones de política exterior hacia países como Cuba y Venezuela, en el marco del denominado cambio de régimen, combinando instrumentos como las sanciones económicas a Venezuela, decretadas a través de Órdenes Ejecutivas del Presidente amparadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), con la aprobación de partidas presupuestarias por el Congreso para apalancar la acción subversiva hacia los gobiernos de los países antes mencionados, bajo el pretexto de la lucha por los derechos humanos y las libertades de expresión económica, entre otras, desde la influencia de CAP ligados a intereses corporativos estadounidenses.

En este entorno se destacó el financiamiento político del sector identificado por OpenSecrets como “Ideología”, expresión del surgimiento de nuevos espacios de valorización del capital asociados a la construcción de hegemonía, que se ocupan del trabajo en agendas para construir consenso en función de la creación de condiciones necesarias para su reproducción sin barreras, desde la promoción de ajustes y cambios políticos e ideológicos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Su creciente capacidad de influencia se muestra en los lugares que ha ocupado por sus contribuciones financieras, en especial desde el año 2014, destacándose el segundo orden en que se ha ubicado en más de una ocasión, solo antecedido del poderoso sector financiero. Durante el gobierno de Barack Obama se produce la firma de leyes de derechos humanos relacionadas con Bielorrusia, Irán y Siria, Corea del Norte y Venezuela, entre otros, coincidentes con las altas contribuciones y el trabajo de cabildeo del sector para las áreas de Política Exterior y Defensa, así como para la de Derechos Humanos.

En 2014, donaron 1,6 millones de dólares, casi todo a comités de partidos y candidatos; de esa suma, el 70 por ciento fue para los demócratas, aunque un republicano, el representante Carlos Curbelo de Florida, fue el principal receptor de donaciones de estos grupos con 127.700 dólares (OpenSecrets, 2014). El financiamiento del CAP “US-Cuba Democracy” -uno de los principales contribuyentes de este sector y de los grupos pro-embargo a Cuba más activos de Washington-, a Carlos Curbelo coincidió con el debate de Washington sobre la importancia de una Cuba “libre y democrática” para los valores e intereses estadounidense que se plasmó en el Congreso de Estados Unidos en el año 2015, escenario del enfrentamiento entre dos visiones acerca de cómo debían ser las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en el entorno del restablecimiento de las relaciones entre los dos países luego de los anuncios del 17 de diciembre de 2014. En ese marco no fueron aprobadas numerosas propuestas de Leyes a favor del desarrollo de las relaciones comerciales entre sectores del empresariado estadounidense, como el agrícola, con el gobierno cubano (González, 2017).

La acción del CAP “US-Cuba Democracy” se mantiene entre los principales contribuyentes del sector “Ideología” hasta el 2023, oscilando entre el 3ro y el 5to lugar en las contribuciones financieras de la industria del consenso, el cambio de régimen y la subversión. Entre los sectores del capital que financian al mismo se ubica la Corporación Bacardí, de origen cubano-americano, presente tras la propuesta y aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996, con amplio trabajo hasta hoy como parte de los grupos de presión alrededor de la política de Estados Unidos hacia Cuba, y beneficiada a la vez como parte de la misma, por el financiamiento de la USAID para trabajar en la «promoción de la democracia» en la Isla.

El perfeccionamiento de los mecanismos de la política de cambio de régimen referidos se mostró en el gobierno de Donald Trump con la inserción directa de los intereses empresariales capitalistas en el poder ejecutivo. En este entorno se ha destacado que Trump no impuso más sanciones que sus antecesores, pero ideó formas particularmente creativas para garantizar que las medidas de su administración generaran el mayor daño posible. Una muestra de ello fue el cambio de foco de las sanciones económicas contra Venezuela, de funcionarios a sectores estratégicos de la economía de ese país, las nuevas medidas contra la economía cubana enfocadas, en igual sentido, hacia el turismo y los servicios médicos cubanos y las dimensiones que se delinearon en la guerra económica contra China.

La política hacia Venezuela constituyó una muestra concreta de la incidencia del interés corporativo estadounidense en la política de cambio de régimen, en especial el referido al sector energético vinculado a la industria del petróleo, cuya alianza histórica con el partido Republicano es apreciable en el análisis del financiamiento político. Como parte de ello se destacaron: la ubicación de Rex Tillerson, ex CEO de la corporación Exxon Mobil,¹ como Secretario de Estado durante parte del gobierno de

1 La corporación Exxon Mobil fue una de las mayores contribuyentes al partido republicano a través del financiamiento político durante los años 2016, 2017 y 2018, en especial, a la campaña de Donald Trump (OpenSecrets, 2016).

Trump, las acciones desarrolladas en función del aislamiento diplomático a la República Bolivariana de Venezuela, la utilización de IEEPA para congelar activos de la petrolera estatal PDVSA, prohibir a inversores estadounidenses comprarle títulos de deuda al gobierno venezolano o negociar con acciones de cualquier entidad de la que tenga participación mayoritaria, entre otras.

La asfixia económica resultante de tales acciones, junto a los intentos de desacreditar al gobierno venezolano a partir de la situación de crisis económica que se generó y de los procesos migratorios asociados a la misma, revelaron la combinación de factores que se manejan como parte de modelos geopolíticos alrededor de temas como la migración para promover el “cambio de régimen” (Vázquez, 2024). En esta línea, la “atención” a la migración durante el gobierno de Donald Trump, así como a los “desafíos transnacionales” de Estados Unidos en la región durante el de Joseph Biden, con el verdadero propósito de garantizar el acceso a sus recursos naturales, desde el enfoque de trabajo del Comando Sur definido como “Disuasión Integrada” y con el sector privado, incluyendo universidades y corporaciones estadounidenses, como parte del mismo equipo, revela un nivel cualitativamente superior de la capacidad de la clase capitalista estadounidense para integrarse con la diversidad de recursos de poder de la nación en función de la satisfacción de sus necesidades de acumulación (Vázquez y Cruz, 2023).

La dimensión de la agresividad que ello supone expresa los alcances del Sistema de Dominación Múltiple del Capital y de la Guerra Híbrida, con la articulación entre los mecanismos y medios para garantizar la acumulación del capital y la reproducción de la hegemonía del país a escala regional e internacional, y constituye una muestra de la evolución de la esencia del imperialismo estadounidense en el siglo XXI desde el corrimiento de la concentración de la riqueza y el capital hacia la concentración del poder político de su clase capitalista sosteniendo la hegemonía como su ámbito natural de reproducción ampliada y dominación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Comisión de Elecciones Federales (2023). *Presidential candidate map data*. <https://www.fec.gov/campaign-finance-data/presidential-map-data/>
- González, Dalia (13 de diciembre de 2017). ¿Se “desbloquea” el Congreso? *Cubadebate*. <http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/12/13/se-desbloquea-el-congreso/>
- OpenSecrets (2014). *Sector total 2013-2014*. <https://www.opensecrets.org/industries/index.php?ind=A&cycle=2014>
- OpenSecrets (2016). *Oil & Gas Top Contributors*. <https://www.opensecrets.org/industries/contrib.php?cycle=2016&ind=E01>
- OpenSecrets (2023). *Candidatos y funcionarios*. <https://www.opensecrets.org/candidates-officeholders>
- Vázquez, Yazmín (2021). Estados Unidos: polarización socioeconómica, clase capitalista y crisis. *Cuadernos de Nuestra América*. (La Habana) No. 01, 80-91.
- Vázquez, Yazmín (2024). Migración y geopolítica en la dinámica actual de las relaciones interamericanas. *Novedades en Población*, 19 (38), <http://www.novpob.uh.cu>
- Vázquez, Yazmín y Cruz, Leydis (2023). Estados Unidos-América Latina: Guerra no Convencional, disuasión integrada, integración cívico-militar y cooperación. *Revista Cuadernos de Nuestra América*, (La Habana) No. 7, 31-44.
-



El poder informacional de los Estados Unidos contra la Revolución cubana en sus 65 años

Olga Rosa González Martín*

El año 2024 marca el 65 aniversario de la revolución cubana en el poder a pesar de los múltiples intentos del gobierno estadounidense por derrocarla. Tres han sido las maneras en que se ha manifestado la ejecución de la política del vecino del norte contra la Isla: 1) prevenir o limitar el impacto político, económico, militar y cultural del proceso revolucionario cubano más allá de las fronteras nacionales; 2) socavar, debilitar y, sobre todas las cosas, derrocar el gobierno cubano y; 3) desarrollar una relación normal entre estados, aunque “normal” no significa relaciones cordiales o aquellas que se tienen entre aliados (Domínguez, s/f).

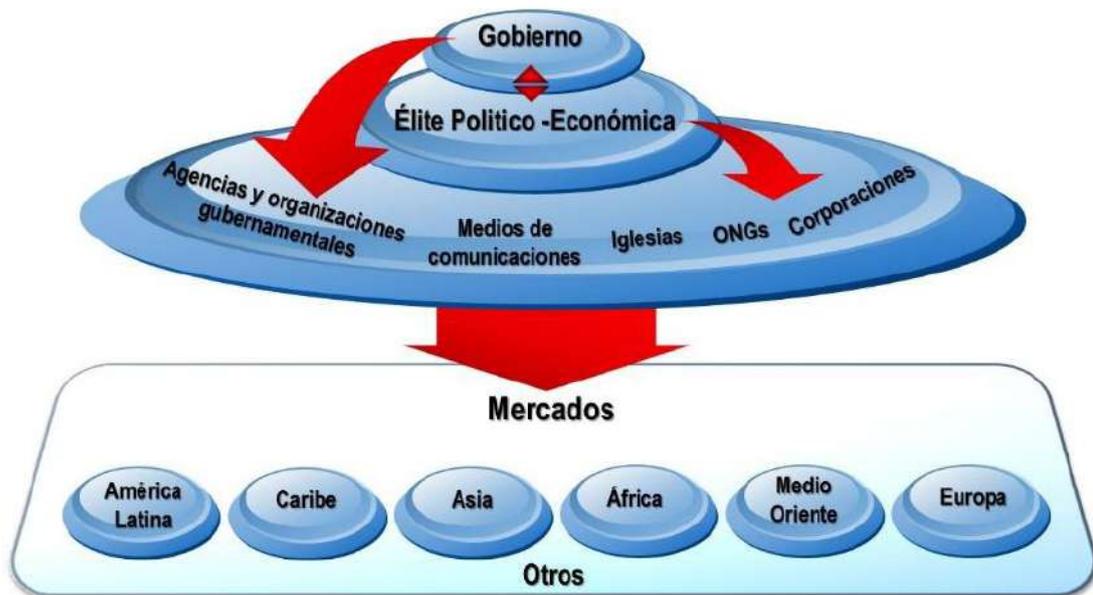
La primera fue evidente hasta los años noventa del siglo XX, pues se esperaba que con el colapso del campo socialista y de la Unión Soviética la caída de la revolución fuera cuestión de tiempo. La segunda se manifestó en dos etapas: una inicial que surgió con el triunfo de la revolución y que tuvo como acciones representativas la invasión a Playa Girón, el terrorismo de Estado y los distintos planes de asesinato contra Fidel Castro y, una segunda, que en la última década del siglo XX, se apoyó en instrumentos legales como la Ley para la Democracia Cubana (Cuban Democracy Act)

* Cuba, miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Estudios sobre Estados Unidos, Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU), Universidad de La Habana.

de 1992 y la Ley para la Libertad de Cuba (LIBERTAD Act) de 1996. La tercera tuvo momentos relevantes durante el mandato de Carter, de Reagan y de Clinton (Domínguez, s/f). Yo añadiría que su momento culminante fue durante el gobierno de Barack Obama, ya en el siglo XXI.

Sin embargo, han tenido en común el uso del poder informacional como uno de los instrumentos del poder nacional de los Estados Unidos (Joint Chiefs of Staff, 2018). El mismo forma parte de la política de comunicación de cualquier Estado hacia el exterior y, en el caso de los Estados Unidos en particular, responde a los intereses de las élites político, económicas y militares que a través de sus vínculos con el gobierno, trabajan en función de garantizar la reproducción del capital a nivel global (González y Vázquez, 2020). La representación gráfica de este proceso sería la siguiente:

Gráfico 1. Modelo de Comunicación Política para el Cambio Cultural



Fuente: González y Vázquez, 2020: 163

Cada uno de esos actores que aparece incluido en el gráfico, ha participado en acciones de comunicación contra el gobierno cubano para lograr no sólo la destrucción de la revolución como proceso, sino la del símbolo que la misma ha representado para los países que han optado por defender su soberanía e independencia. Explicar la manera en que han actuado dos de ellos (una agencia federal que cumplió 70 años en 2023 y cuya Oficina de Transmisiones hacia Cuba celebra sus 40 años -luego de la aprobación en 1984 de la Ley de Transmisiones Radiales hacia Cuba-, y los medios privados no reconocidos por las autoridades cubanas en Cuba) es el objetivo de este breve trabajo. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta su extensión, sólo se hablará de las acciones de comunicación llevadas a cabo contra el gobierno cubano en el territorio nacional y no aquellas relacionadas con la imagen que sobre la Isla han tratado de imponer los Estados Unidos a nivel internacional.

Uso del poder informacional contra Cuba

El Programa de Acciones Encubiertas contra del Régimen de Castro de marzo de 1960 (Elliston, 1999: 16-19) estableció cinco acciones a desarrollar desde el exterior, aunque también las estipulaba dentro del país. Primero, compra de espacios en estaciones de radio privadas en la Florida y acuerdos con la Estación WRUL en Massachussets para transmitir información hacia Cuba por onda corta y media. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) se encargaría de elaborar parte de los materiales (Elliston, 1999:17; Office of the Historian, 1961). Segundo, establecimiento de una estación controlada por los Estados Unidos que funcionaría como la voz de la oposición. En ese momento se hablaba de Radio Swan (Elliston, 1999: 17; Office of the Historian: 1961) la cual había sido fundada por la CIA en mayo de 1960 y se distinguía por el uso de locutores cubanos que, en algunos casos, también habían trabajado para la Empresa CMQ -intervenida en septiembre de 1960 por las autoridades cubanas-.

En tercer lugar, está el apoyo que abiertamente recibieron varios periódicos nacionalizados en Cuba como *Avance*, *El Mundo*, *Diario de la Marina* (Elliston, 1999: 17; Office of the Historian, 1961). Estos eran introducidos clandestinamente en la Isla y se valoró la posibilidad de distribuirlos en otros países de nuestro hemisferio. La cuarta acción incluía la producción y distribución regular en Cuba de publicaciones contra la figura de Fidel Castro y el comunismo (Elliston, 1999: 18; Office of the Historian, 1961). Por último, y ya fuera del territorio nacional, la quinta acción se enfocaba en el trabajo que cubanos funcionales a los intereses de los Estados Unidos harían en América Latina con el apoyo de periodistas estadounidenses (Elliston, 1999: 18-19; Office of the Historian, 1961).

A todo esto, debe sumársele que entre 1960 y 1970 ocho emisoras piratas transmitían desde la Florida contra Cuba. Aunque en los 70 eran solo cuatro, en los 80 llegaron a ser catorce (Valdés-Dapena, 2006). Así, y como parte de las recomendaciones del Comité de Santa Fé I (Bouchev, Fontaine, Jordan, Summer, Tambs, 1980), se valora el establecimiento de una estación de radio que se llamaría Radio Cuba Libre y que finalmente terminó llamándose Radio Martí, como parte del sistema de transmisiones civiles del gobierno de estadounidense. La misma fue resultado de la Comisión Presidencial para las Transmisiones hacia Cuba creada por Ronald Reagan en 1981 y comenzó sus transmisiones el 20 de mayo de 1985, como parte de la Agencia de Información del gobierno de los Estados Unidos (USIA por sus siglas en inglés). Sin embargo, originalmente, su programación estaba pensada también para los cubanos que estaban en países a los que Cuba brindaba ayuda humanitaria y militar, como era el caso de Angola. Al finalizar esta década, la Fundación Heritage emitió un documento en torno a los resultados alcanzados por la política exterior de los Estados Unidos y con relación a Cuba en particular sugiere, entre otras cosas, la creación y establecimiento de una estación de televisión que transmitiera hacia la Isla (TV Martí) para que complementara la labor que venía haciendo Radio Martí (Heatherly and Yale, 1989: 546-547).

Así, y teniendo en cuenta el contexto histórico en que se encontraba Cuba a principios de los años noventa del siglo XX, el gobierno de George Bush padre autoriza a la USIA a que comenzara las transmisiones de TV Martí. Sin embargo, desde el principio, sus resultados han sido desastrosos. Junto a Radio y TV Martí, también transmitían su programación hacia Cuba 34 estaciones de radio entre 1981 y 1995 (Mastrapa en Valdés-Dapena, 2006) aunque tres fueron clausuradas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés). En 1998 quedaban activas trece y en 1999 había siete emisoras transmitiendo desde la Florida (Valdés-Dapena, 2006). Es importante aclarar, no obstante, que a pesar de la cantidad de estaciones de radio involucradas en la agresión contra Cuba, sólo Radio Martí formaba parte de una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos. Las demás emisoras pertenecían a opositores del proceso revolucionario.

En estas casi cuatro décadas de transmisiones de carácter federal hacia Cuba con el pretexto de promover las llamadas libertad y democracia al estilo estadounidense, consignadas tanto en la Ley para la Democracia de Cuba como en la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, el Congreso le ha entregado a la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB por sus siglas en inglés) más de 830,7 millones de dólares. Esta es la encargada de Radio y TV Martí y forma parte de la actual Agencia de Medios Globales del gobierno de los Estados Unidos (USAGM por sus siglas en inglés) -antigua Junta de Gobernadores para las Transmisiones (BBG)- que es la agencia federal independiente del gobierno estadounidense que regula el funcionamiento de todo el sistema de transmisiones civiles de ese país.

Junto al trabajo de una agencia federal como la USAGM contra Cuba, en vinculación directa con el que hace la USAID, por ejemplo, debe considerarse la labor llevada a cabo por todo el sistema de medios privados -no reconocido por las autoridades cubanas-, que existe en la Isla y que responde a los intereses de política exterior de los Estados Unidos. En un estudio realizado en torno a la Guerra No Convencional contra Cuba

durante el gobierno de Donald Trump, Díaz y González (2022) concluyeron que los 165 medios estudiados trataban sistemáticamente, ocho de las trece líneas de mensajes establecidas en los manuales al respecto. Así lo representaron:

Tabla 1. Líneas de Mensajes de Medios No Oficiales en Cuba Funcionales a los intereses de los Estados Unidos

1	El Gobierno cubano es el "responsable" de los problemas existentes en el país.	345
2	El Gobierno es cruel, agresivo, maltrata al "pueblo", grupos contrarrevolucionarios, líderes y miembros.	338
3	Los contrarrevolucionarios hablan, hacen y hasta mueren por el pueblo cubano	269
4	El Gobierno es corrupto y ejerce un control estricto en el país.	89
5	El apoyo externo del que disfruta la contrarrevolución está bien establecido, es extenso. La CR es legítima.	80
6	El Gobierno es mentiroso en todas sus acciones y declaraciones. Nada hecho por el Gobierno es como aparenta ser.	68
7	El Gobierno cubano es responsable del estado de las relaciones entre Cuba y EEUU.	55
8	La política de Trump ayuda al pueblo cubano	50
9	El Gobierno es arrogante y menosprecia al pueblo	25
10	La victoria de la CR es inevitable.	23
11	El Gobierno cubano se involucra en los asuntos internos de países en la región y/o los invade militarmente. Apoya a regímenes	19
12	La CR apoya a los pueblos de Venezuela y Nicaragua en su lucha contra sus Gobiernos.	10
13	Las iniciativas independientes son más efectivas que las auspiciadas por el Gobierno	9
14	no aplicable	70

Fuentes: Díaz y González, 2022: 383

Sin embargo, entre estos medios y la programación de la OCB contra Cuba existe una estrecha relación pues, como demostraron las autoras, es la OCB la que impone la agenda diaria en las mañanas. Así lo plantean:

El estudio confirmó que Martí Noticias, perteneciente a la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, es el vocero oficial del gobierno estadounidense para el resto de los medios no oficiales. Generalmente, guía la agenda temática y las matrices de opinión; al menos en los asuntos estratégicos como las relaciones Cuba-EEUU, la política exterior de Cuba, emigración, los llamados grupos opositores, derechos humanos, los procesos políticos ocurridos en la Isla (las elecciones y la aprobación de la Constitución), vivienda e infraestructura pública o estatal, problemas sociales, y religión. De esa manera la Oficina de Transmisiones hacia Cuba dirige la construcción de la realidad cubana desde la visión de dichos sectores y marca las pautas de la política editorial (Díaz y González, 2022: 394).

En esencia, en estos 65 años de Revolución, los Estados Unidos no han cesado en sus planes de derrocar la Revolución Cubana y han llevado a cabo una intensa labor de propaganda, que en el siglo XXI se ha articulado con el establecimiento y financiamiento de un ecosistema de medios privados en la Isla que es funcional a sus intereses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bouchev, L. Francis; Fontaine, Roger; Jordan, David; Summer, Gordon y Tambs, Lewis (1980). *Las relaciones interamericanas: Escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos*. www.oocities.org/proyectoemancipacion/documentossantafe
- Díaz, Katherinne y González, Olga Rosa (2022). Operaciones de Información contra Cuba en la Guerra no Convencional durante el Gobierno de Trump, *Novedades en Población*, 18(36), pp. 362-399. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1817-40782022000200362&script=sci_abstract
- Domínguez, Jorge (s/f). Reflexiones sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, 1959-1999. <https://hwpi.harvard.edu/files/drclas/files/dominguez0013.pdf> (ponencia, fines de 1990, no publicada pero autorizada por el Prof. Jorge Domínguez).
- Elliston, Jon (1999). *Psywar on Cuba. The declassified history of U.S. anti-Castro propaganda*. New York: Ocean Press.
- González, Olga Rosa y Vázquez, Yazmín (2020). De Obama a Trump: la comunicación política y la disputa geopolítica por América Latina. *Anthropos*, No. 254, pp. 148-165.
- Heatherly, Charles y Pines, Burton (ed.) (1989): *Mandate for Leadership III: Policy Strategies for the 1990s*, Washington D.C.: The Heritage Foundation.
- Joint Chiefs of Staff (2018). Joint Doctrine Note 1-18, Strategy. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/jdn_jg/jdn1_18.pdf
- National Security Decision Directive 274 (1987). *United States Policy Toward Angola*, May, 7, 1987.
- Office of the Historian (1961). Survey Report by CIA Inspector General Kirkpatrick, October 1961. Foreign Relations of the United

Sstates, 1961-1963, American Republics; Cuba 1961-1962; Cuban Missile Crisis and Aftermath, Volumes X/XI/XII, Microfiche Supplement, Document 273a. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10-12mSupp/d273a>

Valdés-Dapena, Jacinto (2006). *Piratas en el éter. La guerra radial contra Cuba, 1959-1999*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.





Los cambios en la asistencia de seguridad de Estados Unidos hacia Colombia

João Estevam dos Santos Filho*

Introducción

Colombia ha sido el principal aliado norteamericano en materia de seguridad regional. La implementación de mecanismos de asistencia de seguridad han sido una realidad en las relaciones entre los dos países desde mediados del siglo XX. En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos fue responsable por apoyar los esfuerzos militares del Estado colombiano contra los grupos guerrilleros internos desde la década de 1950 y sobre todo durante los años 1960 y 1970, cuando sus Fuerzas Militares fueron influenciadas por la Doctrina de Seguridad Nacional.

Sin embargo, después del fin de la Guerra Fría, la asistencia estadounidense hacia Colombia se ha mantenido en niveles altos comparados a otros socios en Latinoamérica -especialmente desde la implementación del Plan Colombia-. De ese modo, el presente artículo se propone comprender las motivaciones detrás de la asistencia de Estados Unidos para el Estado colombiano en la posguerra fría, analizando sus cambios. Se entiende aquí que esos mecanismos estuvieron vinculados a la búsqueda

* Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Anhembi Morumbi. Magíster por el Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Investigador en el Grupo de Trabajo de CLACSO Estudios sobre Estados Unidos y en el Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos (INCT-INEU).

por pacificar la sociedad colombiana a través de dos formas: mediante la intensificación de las acciones contra los grupos generadores de inestabilidad para el proceso de acumulación de capital y la inclusión de las comunidades afectadas por la violencia armada en las relaciones sociales de producción de mercado.

A fin de identificar los objetivos de los programas de asistencia de seguridad para Colombia, fueron recolectados datos de la base internacional *Security Assistance Monitor*, además de informaciones cuantitativas en informes del *Congress Research Service*. También fueron revisados documentos producidos por la *U.S. Agency for International Development* (USAID). Otros datos fueron encontrados en fuentes secundarias, especialmente libros y artículos producidos sobre el tema.

Ese artículo está dividido en cuatro secciones, siendo la primera esta introducción. La segunda aborda teóricamente el tema de la asistencia de seguridad de Estados Unidos y como está involucrada con la construcción de un orden social específicamente neoliberal en América Latina y, particularmente, en Colombia. En la tercera sección son analizados los diversos mecanismos de asistencia de seguridad hacia el país andino desde inicios de la década de 2000 hasta la actualidad. Por fin, en la última sección, son traídas las consideraciones finales sobre las relaciones de Estados Unidos con Colombia en el área de seguridad y defensa.

Asistencia de seguridad de Estados Unidos y construcción de orden social neoliberal

Durante el periodo de la Guerra Fría, la asistencia de seguridad de Estados Unidos hacia Latinoamérica fue basada en la agenda regional de combate a los movimientos subversivos internos bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional (Rouquié, 1984). A través de varios mecanismos tales como la transferencia de armamentos, las élites tomadoras de decisión en Washington estuvieron interesadas en influenciar la formación

del orden político y social en los países latinoamericanos. El objetivo ha sido mantener una situación de estabilidad político-social contra acciones recalcitrantes de grupos marginalizados mediante la utilización de los aparejos de represión del Estado (Stokes, 2005).

En el período de la posguerra fría, la asistencia norteamericana hacia la región ha sido mantenida pese al fin de la “amenaza subversiva”. En ese momento, fueron creados nuevos paquetes de asistencia de seguridad ya en la década de 1990, como fueron la formulación de la Iniciativa Andina todavía en el gobierno de George H. W. Bush (1989-1994), el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina (IRA), la Iniciativa Mérida, la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI). En términos generales, se ha analizado esos mecanismos desde una mirada crítica de la agenda hemisférica gestada desde mediados de la década de 1980, cuyo énfasis era el combate contra el crimen organizado transnacional - particularmente el narcotráfico en la región andina y centroamericana-, la inmigración indocumentada y el terrorismo -este último principalmente a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Herz, 2002; Loveman, 2006).

Pese al hecho de que la creación de dichos programas de asistencia de seguridad estuvo conectada a la nueva mirada norteamericana de intensificación del combate contra las “nuevas amenazas” mencionadas, es entendido aquí que la ayuda estadounidense estuvo más relacionada con la búsqueda por influenciar la creación de un nuevo orden social en los países latinoamericanos basado en una racionalidad neoliberal. Lo que aquí se llama neoliberalismo, es visto más bien como una forma de producción de la subjetividad de los individuos en determinada sociedad a partir de herramientas institucionales y administrativas (Foucault, 2008; Dardot y Laval, 2016). De ese modo, las organizaciones políticas que trabajan con la seguridad son parte de ese sistema institucional.

La defensa de los principios de gubernamentalidad neoliberal por las autoridades políticas norteamericanas con respecto a los países de América

Latina se inició a mediados de la década de 1980, con la defensa de principios como la apertura comercial y la entrada de flujos financieros, como demuestran las tentativas de creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a fines del siglo pasado. También en ese momento fueron gestados acuerdos comerciales subregionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al mismo tiempo, se buscó un aumento de las inversiones hacia la región, especialmente a partir de los programas de privatización que ocurrieron durante las décadas de 1980 y 1990 en países como Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y otros más (Santos, 2007). Bajo esas medidas, se intentó cooptar las élites políticas y económicas latinoamericanas bajo la forma neoliberal de gestión de la sociedad, como muestra la conformación de las “coaliciones políticas neoliberales” (Avilés, 2010); pero al mismo tiempo, se buscó influenciar el comportamiento de los individuos, creando relaciones de producción basadas en el mercado como mediador de las subjetividades.

En ese sentido, la formulación de mecanismos de asistencia de seguridad por parte de Estados Unidos, surgió como forma de asegurar la estabilidad del orden social neoliberal construido en los países latinoamericanos. Eso fue necesario, pues las reformas para la desreglamentación de los mercados internos en esas sociedades llevaron a diversos movimientos contestatarios del proyecto político-económico adoptado por las élites de dichos países -cuya acción se respaldaba en los intereses de élites políticas y económicas de tomadores de decisión en Estados Unidos- (Avilés, 2010). De ese modo, fueron creadas organizaciones sociales y de representación política en defensa de intereses de grupos y clases socioeconómicas marginalizadas o perjudicadas con el establecimiento del orden social neoliberal, como es el caso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil; la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); el movimiento de cocaleros en Bolivia y las organizaciones sindicales operando en Colombia (Petras; Veltmeyer, 2011). Además, no se puede olvidar las reacciones de grupos armados internos, especialmente en Colombia y México, con el crecimiento

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), respectivamente.

En ese sentido, la asistencia de seguridad de Estados Unidos sirvió para fortalecer los aparatos coercitivos de esos Estados, especialmente para contención de grupos guerrilleros y organizaciones ligadas al crimen organizado transnacional, debido a su potencialidad de desestabilizar esas sociedades. Por otro lado, el fortalecimiento de esos aparatos policiales y militares también fue utilizado para contener protestas y acciones de los movimientos mencionados anteriormente. De ese modo, se puede decir que, desde la década de 1990 hasta el presente, la asistencia de seguridad de Estados Unidos ha servido para ayudar la construcción de un orden social neoliberal en los países de la región a través de dos principales mecanismos: en un primer momento, la ayuda fue direccionada hacia una respuesta militarizada a los grupos sociales causantes de inestabilidad al proceso de acumulación de capital; en un segundo momento, la asistencia pasó a enfocar los procesos de expansión del neoliberalismo para las regiones afectadas por la violencia armada no estatal. Eso se dio mediante la coordinación entre los aparatos estatales de coerción y administración de las poblaciones.

El caso colombiano: Del Plan Colombia al posconflicto armado

La militarización de la seguridad interna de Colombia con apoyo de la asistencia de seguridad se remonta a mediados del siglo XX, reflejada en la diseminación de la Doctrina de Seguridad Nacional en sus Fuerzas Militares, como demuestra la ejecución del Plan Lazo y la construcción de la estrategia contrainsurgente y anticomunista durante las décadas de 1960 y 1970 (Leal, 2011). Sin embargo, desde la década de 1990 la asistencia de seguridad de Estados Unidos hacia el país andino sufrió un cambio de paradigma, especialmente después de la creación del Plan Colombia. El paquete de ayuda se destinó a marcar un nuevo momento de la lucha

antidrogas en Colombia, a través de una intensificación de la contribución al fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional mediante dos tipos principales de auxilio: el primero se refiere al aumento de la presencia institucional del Estado en áreas marcadas por el conflicto armado, garantizando “la pacificación por vía del contacto estatal con la comunidad y por medio de una salida negociada” (Tokatlian, 2001: 210). La segunda dimensión es la asistencia antidrogas y contrainsurgente y está basada en la idea de que “sólo más poder de fuego y más despliegue espacial de las fuerzas armadas puede equilibrar el creciente poderío territorial de la guerrilla y la enorme influencia regional del narcotráfico” (Tokatlian, 2001: 210-211).

De esa forma, cuantitativamente se verifica entre los años de 2001 y 2007 un crecimiento significativo del volumen total de la asistencia de seguridad estadounidense para Colombia, variando de US\$ 229,5 millones a US\$ 1,4 billones. De esa cifra, los programas que más representaron ese aumento fueron el *International Narcotics Control and Law Enforcement* (INCLE) y la *Section 1004 Counter-Drug Assistance*, lo que resalta su carácter militarizado, contando con presupuestos del Departamento de Estado -a través del INCLE- y del Departamento de Defensa -por medio de las cifras transferidas por el *U.S. Southern Command* (SOUTHCOM)-. En lo que se refiere a la variación de transferencia de armamentos, fue registrado un crecimiento entre 2004 y 2007 de US\$ 235,9 millones a US\$ 603,5 millones, representando un aumento sustancial de ventas de material bélico para el país andino en comparación con su histórico en las relaciones con Estados Unidos. Por su parte, la variación de militares colombianos entrenados por instructores norteamericanos creció de 6.300 a 14.408 entre 2001 y 2007 (CIP, 2024). De esa forma, se entiende que el énfasis de la asistencia de seguridad estuvo en el componente militarizado (la segunda dimensión mencionada arriba), cuyo foco era eliminar los elementos de desestabilización del orden social interno, en ese caso, los grupos guerrilleros y las organizaciones de crimen organizado.

Cualitativamente, la asistencia militar de Estados Unidos estuvo enfocada en la construcción de unidades militares que cumplieren su rol contrainsurgente y antidrogas, especialmente en el sur del país andino. Para ello, fueron transferidos nuevos armamentos mediante el Plan Colombia, como aeronaves, embarcaciones y radares basados en tierra. Por otro lado, fueron creadas nuevas unidades militares, como la Brigada de Aviación del Ejército Nacional, la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), la Fuerza Tarea Conjunta del Sur y la Fuerza Tarea Conjunta Omega, además de la reforma del sector de inteligencia estratégica a través de asistencia técnica a la formación de la Central de Inteligencia Conjunta (Rojas, 2015). En términos doctrinales, la asistencia estadounidense buscó incrementar la interoperabilidad entre las tres fuerzas militares, en el nivel estratégico y táctico, como demuestran las acciones conjuntas entre Ejército y Fuerza Aérea, además de la creación de los Comandos Conjuntos, que reunían comandantes de las tres instituciones castrenses (Vargas, 2012).

A finales de la década de 2000, dos factores coyunturales importantes reforzaron un cambio en la estrategia de asistencia norteamericana a las instituciones de seguridad del Estado colombiano. En primer lugar, la crisis de 2008-2009 contribuyó para la caída del presupuesto destinado a los programas de asistencia de seguridad por el gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, juntamente con un Congreso de mayoría demócrata, en 2009 asumió la presidencia Barack H. Obama (2009-2017), que contó con una estrategia diferente de la militarización de los años 1990 y 2000 para los países de América Latina y especialmente Colombia. Pero el gran fenómeno que marcó ese cambio en la asistencia de seguridad estadounidense hacia el país andino, fue la disminución del poderío de las entidades guerrilleras, tanto las FARC cuanto el ELN a partir de finales de la década de 2000. De esa forma, se puede hablar de una modificación estructural en términos de resistencia al orden social neoliberal en Colombia por los grupos guerrilleros e incluso las organizaciones del crimen organizado. Ese hecho va a marcar la nueva fase de la estrategia de asistencia de seguridad de Estados Unidos a partir del gobierno Obama.

En términos cuantitativos, desde 2008 se verificaron una disminución del presupuesto de seguridad enviado desde el gobierno norteamericano: mientras la cifra total fue de US\$ 699,3 millones en ese año, fueron registrados solamente US\$ 237,8 millones en 2022, representando una caída significativa de los números generales de la asistencia estadounidense hacia el país andino. Más específicamente, se verificó una disminución también en los recursos asignados por el Departamento de Defensa y un aumento de los recursos suministrados por el Departamento de Estado. También hubo un involucramiento más grande de la USAID en los recursos para apoyo en temas como derechos humanos y garantía de la ley y del orden, además de recursos enviados para apoyar la reforma del sector seguridad en Colombia. También se comenzó a enviar cifras de asistencia humanitaria para el país. A pesar de ello, se continuó con niveles relativos elevados de auxilio en las actividades antidrogas, demostrando que la asistencia militar norteamericana todavía tiene un rol importante en la política de seguridad hacia Colombia (CIP, 2024).

Cualitativamente, se puede afirmar que la asistencia de seguridad para Colombia sufrió cambios con una menor importancia relativa de las transferencias militares, lo que puede ser explicado por los cambios en el conflicto armado, con la pérdida de importancia estratégica de las acciones guerrilleras, incluso de las FARC. De ese modo, el énfasis ha recaído sobre todo en la estabilización de los territorios “conquistados” por las fuerzas de seguridad del Estado en el interior del país. Entre 2009 y 2013, el gobierno estadounidense apoyó la implementación del Plan Nacional de Consolidación que buscaba crear infraestructura física y socioeconómica en áreas afectadas por la violencia armada como forma de pacificarlas. De ese modo, fue creado el programa The Colombia Strategic Development Initiative implementado por la USAID como forma de apoyar las acciones del Estado colombiano (Rojas, 2015; USA, 2013).

Además, desde 2014, fueron creados dos ediciones de Country Development Cooperation Strategies (CDCS) para Colombia, el primer implementado entre 2014 y 2018 y el segundo entre 2020 y 2025. Pese a sus

diferencias, las dos ediciones del programa tuvieron como objetivo ayudar en la creación de condiciones socioeconómicas en las áreas marginadas del país -las mismas que padecieron con el conflicto armado interno- para incluir las poblaciones en la esfera del mercado mediante la atracción de empresas transnacionales y nacionales, además de organizaciones no gubernamentales con la finalidad de generación de empleos en áreas como administración de negocios, emprendimientos rurales, ingeniería, energía sostenible y otros sectores (USA, 2014; 2020).

Por fin, otro programa también implementado por el gobierno de Estados Unidos para apoyar ese esfuerzo de pacificación de las comunidades colombianas afectadas por la violencia, fue el Paz Colombia que sustituyó el Plan Colombia en 2016 y que contó con un presupuesto total de US\$ 391,3 millones, de los cuales US\$ 187 millones fueron destinados para incrementar los programas de desarrollo socioeconómico para víctimas del conflicto armado mediante el *Economic Support Funding* (ESF), mientras solo US\$ 59,5 millones fueron destinados al fortalecimiento de las Fuerzas Militares (Beittel, 2019). Es importante mencionar que la asistencia de seguridad de Estados Unidos para Colombia recientemente incluyó un incremento en los presupuestos destinados a la asistencia socioeconómica, como el ESF y la *Development Assistance* (DA)- este último implementado desde 2020.

Consideraciones finales

Este trabajo analizó las relaciones entre Estados Unidos y Colombia desde la década de 2000 hasta inicios del 2020, buscando comprender la permanencia de los programas de asistencia de seguridad y sus cambios durante esos años. Para ello, fue utilizado un referencial teórico que conecta la seguridad con la construcción de un orden social neoliberal, a través de la construcción de condiciones sociales en contra de los agentes y fenómenos sociales con potencial desestabilizador para el proceso de acumulación de capital y de expansión de las relaciones sociales de

producción, típicamente de mercado. A ello se denomina aquí como un proceso de pacificación.

A su vez, ese proceso suele explicar las transformaciones de la asistencia de seguridad estadounidense para Colombia, pasando de un énfasis fuertemente militarizado a un enfoque basado en la inclusión de comunidades afectadas por el conflicto armado, mediante la implementación de proyectos de desarrollos coordinados por la USAID en apoyo a los planes del gobierno colombiano. De esa manera, se pudo observar un giro cada vez más en dirección a la disminución de la importancia relativa del auxilio militar para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en comparación con otros sectores intensivos en ayuda humanitaria, económica y de reformas del sector seguridad. Con ese cambio de estrategia, las élites políticas de Washington han podido dar continuidad al proceso de integración colombiana al sistema político-económico neoliberal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aviles, W. (2010). *Globalization and military power in the Andes*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Beittel, J. (2019). *Colombia: Background and U.S. Relations*. Washington, D.C.: Congress Research Service (CRS).
- Center for International Policy (CIP). (2024, March 6). Security Assistance Monitor (SAM). Retrieved April 9, 2024, from CIP website: <https://internationalpolicy.org/programs/sam/>.
- Dardot, P., & Laval, C. (2016). *A nova razão do mundo*. Boitempo Editorial.
- Foucault, M. (2008). *Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979)*. São Paulo: Martins Fontes.
- Herz, M. (2002). Política de segurança dos EUA para a América Latina após o final da Guerra Fria. *Estudos Avançados*, 16(46), 85-104.
- Leal Buitrago, F. (2011). Una visión de la seguridad en Colombia. *Análisis Político*, 24(73), 3-36.

- Loveman, B. (2006). *Addicted to Failure*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.
- Petras, J., & Veltmeyer, H. (2011). *Social Movements in Latin America*. New York: Palgrave Macmillan.
- Rojas, D. M. (2015). *El Plan Colombia: la intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012)*. Bogotá: IEPRI.
- Rouquié, A. (1984). *El estado militar en América Latina*. Ciudad de México: Siglo Veintiuno.
- Santos, M. (2007). *O poder norte-americano e a América Latina no pós-guerra fria*. São Paulo: Annablume
- Stokes, D. (2005). *America's Other War: Terrorizing Colombia*. London: Zed Books.
- Tokatlian, J. G. (2001). El plan Colombia: ¿un modelo de intervención? *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (54-55), 203-219.
- United States of America (USA). (2013). *Colombia Program at-a-glance*. Washington, D.C.: USAID.
- United States of America (USA). (2014). *USAID/Colombia's Country Development Cooperation Strategy*. Washington, D.C.: USAID.
- United States of America (USA). (2020). *USAID/Colombia's Country Development Cooperation Strategy*. Washington, D.C.: USAID.
- Vargas Velásquez, A. (2012). *Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano*. Bogotá: La Carrera Política.





Tierra arrasada en Ecuador y el rol de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos

Tamara Lajtman*

Aníbal García Fernández**

Silvina Romano***

En 2023 fueron asesinados al menos 9 políticos ecuatorianos. El caso más llamativo fue el asesinato del candidato a presidente Fernando Villavicencio, faltando dos semanas para las elecciones de 2023. De inmediato, como parte del proceso de lawfare impulsado desde 2017, los medios de comunicación, funcionarios de turno y referentes políticos, culpabilizaron del gravísimo hecho al expresidente Rafael Correa y sectores políticos vinculados a él. El Gobierno de Lasso pidió ayuda al FBI de Estados Unidos para esclarecer el caso. Pasados unos meses y a días de la segunda vuelta electoral, 6 de los sospechosos del crimen fueron asesinados estando presos en Guayaquil. Solo en el año 2023 se registraron 7.800 muertes violentas, la tasa más alta en la historia de Ecuador.

* IEALC/UBA-CONICET, Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios sobre Estados Unidos y del Grupo de Trabajo CLACSO Geopolítica, integración regional y sistema mundial, investigadora del Observatorio Lawfare, Argentina.

** PPELA/UNAM, Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO Crisis y Economía Mundial, investigador de Observatorio Lawfare, México.

*** IEALC/UBA-CONICET, Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios sobre Estados Unidos y del Grupo de Trabajo CLACSO Geopolítica, integración regional y sistema mundial, coordinadora del Observatorio Lawfare, Argentina.

Esta espiral de violencia desencadenó un escenario de máxima amenaza a la seguridad pública el 9 de enero de 2024, a raíz de la toma de las cárceles por parte de bandas criminales días antes. El 7 de enero, uno de los jefes del crimen organizado más peligrosos del país escapó de la cárcel, y el 9 de enero prosiguió la fuga de otros criminales. Ese mismo día, personas armadas tomaron un canal de televisión de Guayaquil, a la vez que se perpetró un ataque armado en contra de la Universidad de la misma ciudad. El presidente Daniel Noboa calificó los hechos como parte de un “conflicto armado interno” y decretó “Estado de Excepción”. Autorizó a los militares a neutralizar a los grupos del crimen organizado. El decreto enumera 22 grupos por su nombre y los declara “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

Estados Unidos tiene un rol en este contexto: La construcción del escenario de “tierra arrasada” en Ecuador -ausencia de institucionalidad, economía fallida, quiebre del tejido social y avance del narcotráfico- es acompañada por una serie de visitas de funcionarios de las principales agencias de seguridad estadounidense, como el Comando Sur, el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina Internacional de Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), DEA y FBI, y el anuncio de nuevos acuerdos y paquetes de ayuda. Como corolario, el 15 de febrero, el presidente Noboa ratificó el Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y el Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, que se habían firmado durante el Gobierno de Lasso.

En lo que se refiere a la ayuda estadounidense a Ecuador anunciada desde enero de 2024 incluye: construcción de una nueva Academia de Guardacostas, renovación de una clínica veterinaria canina, nueva oficina para la unidad de procesamiento de corrupción, ocho unidades fronterizas móviles para apoyar a un grupo de trabajo fronterizo de élite, una unidad operativa conjunta Policía Nacional-Guardacostas en Guayaquil; soporte de análisis forense digital para identificar, mapear y atacar redes criminales; un equipo capacitará a 175 funcionarios de migración de Ecuador en el uso de la recolección biométrica; capacitación de 35 integrantes de

las unidades de protección presidencial y vicepresidencial del Ecuador; aumento de asesores del FBI en el país; un avión militar C-130H se entregará a finales de marzo; más de 20.000 chalecos antibalas; más de \$1 millón en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias; \$13 millones en equipos para proteger las redes informáticas del Ministerio de Defensa del Ecuador; \$2,4 millones en vehículos y equipos de seguridad adicionales para la policía de Ecuador y 6 camiones Navistar Defense 7000-MV (Isacson, 2024)

Restablecimiento de vínculos institucionales con las fuerzas de seguridad hacia el “Plan Ecuador”

Es clave considerar que no se trata de un proceso novedoso o coyuntural. Desde inicios del gobierno de Lenin Moreno, en paralelo con el proceso de lawfare desplegado contra la Revolución Ciudadana, se reestablecieron vínculos institucionales con fuerzas de seguridad estadounidenses. Uno de los hechos clave fue la tensión en la frontera colombo-ecuatoriana generada a partir de marzo de 2018 en el contexto de secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Así, entre 2018 y 2020 se llevaron a cabo varios acuerdos sobre intercambio de información y cooperación para lucha contra el crimen transnacional y el tráfico de drogas, que habilitaron una mayor presencia de la DEA, FBI e INL. Se percibe una vinculación entre aparato de inteligencia, seguridad y su incidencia en la manufacturación de los casos judiciales. INL, del Departamento de Estado, restableció su presencia en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador con programas anticorrupción, áreas de justicia penal y observación de la ley, mientras que el Departamento de Defensa estableció la Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS), en la Embajada, habilitando programas como IMET, FMS, asistencia humanitaria, ejercicios conjuntos y preparación para desastres. También destaca en ese periodo la creación de una Oficina para el intercambio de información con Estados Unidos y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), la creación de la Unidad Investigativa Criminal Transnacional

(TCIU) dentro de la Policía Nacional con 12 funcionarios graduados en 2018 y un Memorando de Entendimiento para colocar a un oficial de enlace ecuatoriano en la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Sur (JIATF-S) en Cayo Hueso, Florida.

El 8 de junio de 2022, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, Laso, propuso a la administración Biden la iniciativa del Plan Ecuador y en diciembre el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador” como parte de Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional (NDAA 2023), dicha ley fue promovida por los senadores Bob Menendez, Jim Risch, Tim Kaine, Marco Rubio, Bill Cassidy y Ben Cardin. Se incluyen temas comerciales, desarrollo y seguridad. Entre otros aspectos, autoriza el traslado de patrulleros sobrantes de la Guardia Costera a Ecuador, y fortalece la cooperación de seguridad en cuestiones cibernéticas, policiales y militares. Como ejemplo de la “extraterritorialidad de la ley estadounidense” (US Senate, NDAA, 2024), aunque la Asamblea Nacional de Ecuador haya rechazado el 16 de junio de 2022 el proyecto de ley del Congreso estadounidense con 75 votos, el Congreso de Estados Unidos lo aprobó como parte de la NDAA que considera que “El fortalecimiento de la asociación entre Estados Unidos y Ecuador presenta una oportunidad para promover los intereses fundamentales de seguridad nacional de los Estados Unidos” (punto 3.2).

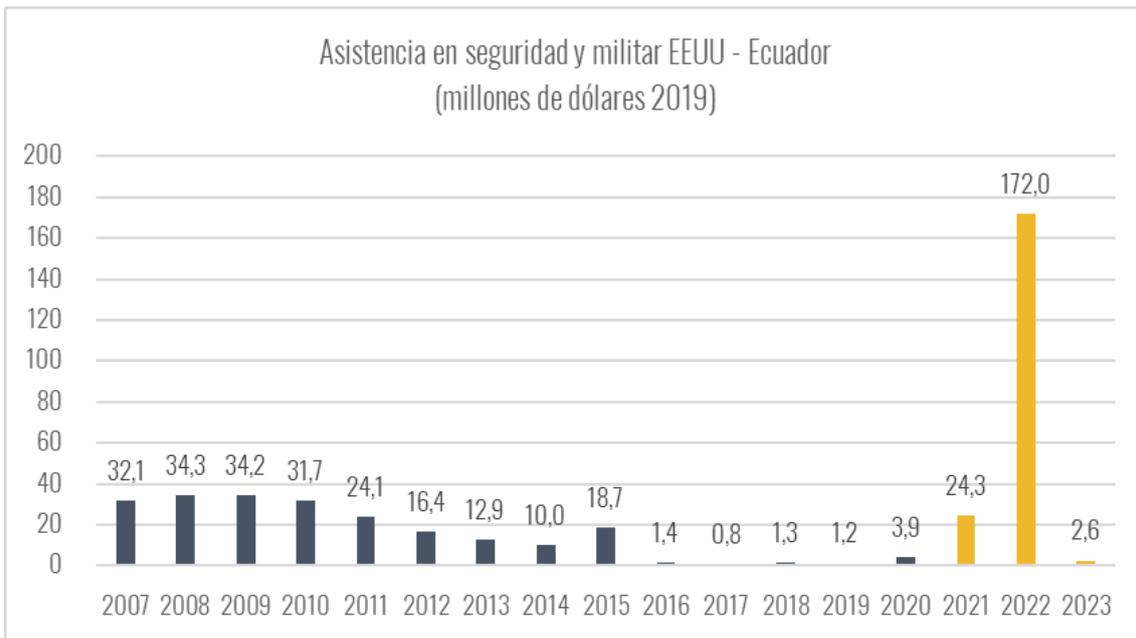
En julio de 2023, se firmó el Plan de Cooperación de Estados Unidos con Ecuador en la sede del Departamento de Defensa, orientado al combate del tráfico ilegal de narcóticos y sus delitos conexos, tales como la delincuencia organizada transnacional, delitos en los espacios acuáticos y las acciones de los grupos irregulares armados (categoría que luego será utilizada por Noboa para la declaratoria del Estado de Excepción). Contempla cuatro puntos relevantes: intercambio de información, desarrollo de capacidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador, entrenamiento y capacitación y, adquisición de recursos esenciales. Aunque la nota de la Embajada no incluye una asignación financiera específica, el ministro de

Defensa de Ecuador mencionó que el acuerdo implica una inversión de más de 3.100 millones de dólares durante los próximos siete años.

En lo que se refiere al Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, firmado el 6 de octubre de 2023 y ratificado el 15 de febrero de 2024 por Noboa, otorga privilegios, inmunidad y garantías al personal militar estadounidense y personal civil del Departamento de Defensa y contratistas. Cualquier “exceso” será dirimido en la Justicia de Estados Unidos. Garantiza el libre desplazamiento en territorio ecuatoriano de aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa. Es, en definitiva, una base legal que Estados Unidos considera necesaria para garantizar la inmunidad de su personal en la implementación de planes y acuerdos más amplios en materia de seguridad y defensa. El otro instrumento ratificado el 15 de febrero, el Acuerdo de Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales (Decreto 165), fue anunciado en septiembre de 2023 durante una mesa redonda de la Fuerza de Intervención del Congreso de Estados Unidos para Combatir a los Cárteles de la Droga Mexicanos que contó con la presencia de Lasso. A estos, se añade el Acuerdo de cooperación para la interceptación aérea, ratificado el 16 de agosto de 2023 con el Decreto 846.

Asistencia militar y en seguridad

Estos vínculos se reflejan en los flujos de asistencia militar y en seguridad. Con Correa disminuyó la asistencia en seguridad en los últimos cuatro años de su mandato de 13 a 1,4 millones. Con Lenin Moreno casi se triplica la asistencia (pasó de 0,8 en 2017 a 3,9 millones en 2020). Durante la administración de Guillermo Lasso hay un incremento sustancial que no tiene comparación con los gobiernos anteriores.



Fuente: elaboración propia con base en ForeignAssistance.gov, 2024

El monto de 2022 es más de 7 veces lo que se otorgó con Moreno. Este aumento se refleja particularmente en el financiamiento para el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) con 171 millones de dólares solo en 2022. FMF es una fuente de financiación otorgada a un país socio mediante una subvención o un préstamo directo utilizado para provisión de equipos, capacitación y servicios. Esta asignación específica hace que Ecuador se ubique como el principal receptor de la asistencia netamente militar en la región durante la administración Biden (2021-2022, no hay datos para 2023)

Asimismo, gana más peso la asistencia de INL, (16,7 millones entre 2021 y 2023, un incremento de 3.4 veces más en relación al periodo anterior). En su “Informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes” (marzo 2022) INL destaca: 1) apoyo logístico y operativo a las operaciones antidrogas, y capacitación en interdicción marítima y terrestre; 2) Donaciones, asistencia técnica y capacitación a jueces, fiscales, policías, guardacostas, militares, analistas financieros y otros funcionarios del sector de justicia penal para combatir el tráfico de drogas y el crimen

organizado transnacional; 3) Incautación de 9,4 TM de cocaína en Guayaquil por la Policía Nacional de Ecuador, con apoyo de Estados Unidos, (fue una de las más importantes en la historia del país). Parte de los proyectos de INL es canalizado por las siguientes organizaciones: UNODC, OEA, Celestar Corporation, Dexis Consulting Group, National Center for State Courts y New Tech Solutions.

Ahora bien, es relevante destacar que, si bien la asistencia en seguridad y militar fue relativamente baja con Lenin Moreno, aumentó la compra de armas en un 465% con respecto a los últimos 4 años de Correa. En el periodo 2018-2022, el 75% de las compras fue de turbinas de avión, explosivos, dinamita y otras piezas de aviones. No hay mayor información sobre las últimas compras que ha realizado el gobierno ecuatoriano, pero, se puede establecer que, ante el aumento de la conflictividad entre Estados Unidos y Venezuela, y de éste con Guyana por el Esequibo (territorio con amplias reservas de petróleo) y, ante el cambio de gobierno en Colombia, Ecuador se convierte en una suerte de base de operaciones para continuar la desestabilización regional contra Venezuela, que se encuentra en un año electoral.

El caso ecuatoriano, como en su momento el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, tuvieron consecuencias sociales, políticas y económicas desastrosas para ambos países y que hasta la fecha continúan. El Plan Ecuador se establece bajo tierra arrasada, con la previa destrucción de la base productiva, de los empresarios nacionales y la economía en su conjunto, que desde 2019, aplicó el ajuste estructural comandado por el FMI. Ahora, continúa la destrucción del tejido social y la continuidad de paquetes de reformas al Estado para perpetuar la vía neoliberal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

US Senate (2024). Subtitle B-United States-Ecuador 7 Partnership Act of 2022, disponible en: https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/final_ndaa_ecuador_bill.pdf

Isacson, Adam (2024). "Arms Transfers in the Americas: some Links from the past month", 19 de febrero, disponible en: <https://>

adamisacson.com/arms-transfers-in-the-americas-some-links-from-the-past-month-2/

ForeingAssistance.gov (2024). U.S. Agency for International Development (USAID) and U.S. Department of State on behalf of United States Government agencies reporting foreign assistance.





A Crise da Hegemonia dos EUA e o Papel do Brasil na Ordem Multilateral Emergente

Rafael R. Ioris*

Os ordenamentos multilaterais de poder criados no pós-Segunda Guerra enfrentam hoje uma de suas maiores crises, e a capacidade dos EUA para definir os rumos da governança econômica e geopolítica global se encontra hoje cada dia mais diminuída. As causas de tal realidade são variadas e complexas. No âmbito doméstico, poderíamos citar a crescente incapacidade do sistema político em responder ‘as profundas transformações econômicas e socio-culturais em curso; enquanto que no cenário internacional, o principal fator desestabilizador seria a histórica ascensão da China, assumindo cada vez mais interesse em desempenhar um papel mais importante nas deliberações sobre uma possível reorganização das estruturas de poder global (Jalife-Rahme, 2024). Seria impossível examinar com maior profundidade tais processos e um artigo de síntese como esse e que busca, de fato, apontar o impacto destas dinâmicas no contexto latino-americano e, com ainda maior atenção, indicar, ainda que de maneira sugestiva, como países regionais, em especial o Brasil, que já tem desempenhado um papel mais ativo no cenário diplomático global ao longo dos últimos anos, poderia responder a essas transformações de

* Professor da Universidade de Denver e membro do Grupo de Trabalho da CLACSO Estudios sobre Estados Unidos. (<https://liberalarts.du.edu/about/people/rafael-ioris>).

modo a fazer valer interesses e necessidades históricas do nosso continente, talvez mesmo do Sul Global.

Esse tipo de reflexão seria sempre desafiadora dada a baixa capacidade histórica da América Latina para influenciar processos de reconfiguração das estruturas de ordenamento do mundo. A tarefa se torna ainda mais difícil no contexto atual onde temos a reemergência da extrema direita e o associado retorno do modelo neoliberal com traços ainda mais autoritários, assim como o retorno em escala ampliada do uso da violência estatal e da guerra como forma de garantir a manutenção de interesses ou a suposta resolução de disputas regionais. Mas mesmo dentro de um contexto de agravamento da crise das dinâmicas políticas da democracia liberal, o principal fator de criação do alto grau de turbulência do mundo de hoje parece ser a crescente disputa hegemônica entre Estados Unidos e China e que assume níveis de explicitação cada dia mais claros (Kupchan, 2023). Se tal disputa se expressa por quase todas as áreas do mundo, é na América Latina, região historicamente sob a hegemonia norte-americana mas que nos últimos anos tem sido foco estratégico da ascensão chinesa, onde a crise da ordem multilateral poderia se expressar de forma mais clara. Certamente, muito dos contornos de como esse processo se desdobrará ao longo dos próximos anos dependerá da eleição presidencial norte-americana desse ano. Mesmo assim, parece certo que continuaremos a enfrentar altos níveis de instabilidade econômica e fragmentação política, e que tanto EUA como China tenderão a aumentar o grau das pressões por alinhamentos, formais ou informais, por parte de países regionais (Stuenkel, 2021).

Mas mesmo dentro de um quadro de pressões crescentes, talvez seja da América Latina de onde se poderia imaginar que novas formas de articulação, talvez mesmo resolução, de tais disputas poderiam surgir desde que, é claro, haja tanto capacidade para atores regionais tentarem encaminhar tais caminhos de reconciliação, quanto abertura por parte dos atores hegemônicos em disputa em entender possíveis tentativas de compromissos apresentadas por países latino-americanos chave, como

o Brasil. E embora Lula tenha começado a reconstruir a imagem do Brasil como ator essencial em qualquer deliberação global futura, é certo que não há como retomar de maneira direta e linear a positiva experiência da Diplomacia Altiiva e Ativa do início dos anos 2000. O Brasil mudou e o mundo mudou – em geral em um sentido negativo. Mesmo assim, caberia ao Brasil buscar desempenhar nos próximos anos um papel chave como interlocutor privilegiado da América Latina junto aos países ocidentais, tanto quanto junto, e em conjunto, aos países emergentes do Sul Global.

Buscando atuar nessa direção, Lula tem mantido uma ambiciosa agenda de viagens internacionais que, como em seus primeiros mandatos, buscaram equilibrar encontros junto a parceiros tradicionais ao mesmo tempo em que tentava resgatar e expandir projetos ligados à chamada agenda do Sul. Seu périplo iniciou vizinha Argentina onde participou de uma reunião da CELAC. Em seguida foi a Washington, onde encontrou Biden e conjuntamente fizeram declarações, mais simbólicas que práticas, em defesa da democracia e do meio ambiente. Como contrapartida, algumas semanas depois, Lula fez uma ambiciosa visita à China a fim de aprofundar as relações comerciais e tentar liderar um esforço de paz para a guerra na Ucrânia. Os esforços de Lula ligados à defesa de um reordenamento mais inclusivo das estruturas de governança global assumiram maior magnitude após o último encontro dos BRICS em Joanesburgo, no final de agosto passado. Foi então que houve a formalização de um processo de ampliação do número de países membros, que se consolidou na criação do atual *BRICS Plus*, grupo de países que representa cerca da metade da população mundial e detêm um terço do PIB global.

Muito tem sido dito sobre as dificuldades que um grupo tão díspare de países terá para seguir adiante na promoção de uma agenda comum (Karadjis, 2023). Lembremos, porém, que o BRICS nunca representou ou se constituiu como uma aliança ou união aduaneira formal, tendo sido mesmo ironicamente criado, como expressão (inicialmente BRIC) no início dos anos 2000, como instrumento da lógica mercadológica do G7

(países capitalistas mais ricos do mundo), qual seja como sugestão de quais mercados não centrais, mas emergentes, os grandes investidores capitalistas deveriam investir nos anos seguintes. Desde então, contudo, os países referenciados pela sigla passaram e se valer da mesma não para corroborar a intenção original da expressão, ou seja, garantir a atratividade de seus mercados para o benefício do grande investidor internacional, mas sim como forma de buscar articular uma melhor inserção conjunta de países não ocidentais dentro da economia e ordem política mundiais, crescentemente, inclusive, questionando-a de maneira crítica e sistemática. Tal processo foi no início bastante lento mas acelerou-se de maneira significativa na última década, refletindo claramente novas dinâmicas nas relações internacionais do mundo de hoje. E fica cada vez mais evidente que se trata de um grupo de países disposto a se tornar cada vez mais relevante no cenário internacional, inclusive por meio do aprofundamento da promoção de novos arranjos econômicos e políticos que possam representar de maneira mais efetiva as mudanças no peso de atores específicos fora do eixo do Atlântico Norte, assim como as novas dinâmicas econômicas e geopolíticas em curso.

É claro que nada disso aconteceu sem polêmicas. Aventou-se que a decisão da ampliação no número de membros teria derivado e beneficiado quase que exclusivamente a China, o grande rival em ascensão contra a ordem de poder liderada pelos EUA. No mesmo sentido, poderíamos pensar que uma maior representatividade do Sul Global poderia vir a ser efetivada somente se países como Indonésia, Nigéria, México, Colômbia, entre outros, fossem incluídos no grupo. Mas independentemente de quem a ampliação dos BRICS beneficie, em maior ou em menor grau, o encontro histórico dos BRICS em Joanesburgo tornou ainda mais evidente a urgência de um reordamento na dita ordem mundial – de fato, cada dia mais fora de ordem. Como exemplo, as democracias liberais ocidentais parecem enfrentar hoje uma das suas maiores crises desde, pelo menos, os anos 1960. E o autoritarismo que, corretamente, as lideranças de tais países criticam em vários membros dos BRICS, parece tornar-se moeda corrente de líderes que cada dia mais se viabilizam como futuros

ou atuais chefes de governo, como Trump e Le Pen (para não citar Meloni e Orban).

Parece imprescindível pois que haja uma expansão da agenda e uma ampliação dos espaços formais de deliberação da governança global de forma que vozes ampliadas e diversas possam ser levadas efetivamente em consideração no processo de tomada de decisão de interesse global. Estes teriam que incluir questões já há muito em pauta, como a lógica injusta do comércio e dos fluxos financeiros internacionais, mas teriam cada vez mais que incluir também temas normalmente relegados a um segundo ou terceiro plano, como aqueles ligados 'a crescente desigualdade dentro e entre países, assim como a questão da fome, migrações, e crise ambiental. Dentro desse processo, parece sugestivo pensar que, de uma perspectiva de médio, ou talvez mesmo longo prazo, o atual quadro da agenda e dos desafios internacionais parece ecoar, em algum grau, ao mesmo tempo em que complexifica, a demanda por uma Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI) mais inclusiva em voga nas décadas de 1960 e 1970.

Não se trata aqui de dizer que os BRICS representam a culminação linear de um projeto de longa gestação. A retomada mais explícita de tais temas ocorre hoje evidentemente segundo novos parâmetros e dentro de contexto geopolítico significativamente distinto. Cinquenta anos atrás as esferas internacionais de poder não estiveram dispostas a considerar a possibilidade de um mundo menos ocidental onde o comércio global se desse em termos menos desiguais, houvesse maior transferência de tecnologia para os países pobres e o armamentismo fosse substituído pela redução da pobreza. Mas se era esse o quadro de então, presenciamos hoje uma inelutável reorganização dos eixos econômicos e geopolíticos globais rumo a formação de um mundo crescentemente menos ocidental, ou, pelo menos, um mundo mais complexo, onde não ocidentais competem abertamente pela influência, talvez mesmo predominância em diversas áreas do globo. Se tal realidade será suficiente para permitir a retomada de esforços coletivos duradouros por rearranjos efetivos no ordenamento

do sistema internacional, é algo ainda incerto. Até o momento os BRICS, mesmo ampliado, ainda não nos permitem afirmar que representem, de fato, as demandas representativas do Sul Global como um todo, como os Não Alinhados pretendiam fazê-lo, talvez de maneira mais plausível. De todo modo, especialmente dado que vários outros países, além dos cinco novos membros, estariam interessados em se juntar ao grupo, temos, sim, a possibilidade crescente de uma maior representatividade de vozes – algo que tenderá a enriquecer a pauta de demandas, mesmo que haja um grande desnível no peso de países específicos dentro do bloco.

Claro que um BRICS ampliado requererá grande habilidade de negociação interna, assim como canais de diálogo com os países centrais da ordem hegemonia decadente mais ainda em funcionamento. E é aqui onde, mais do que nas experiências do passado, o Brasil poderia ocupar um papel chave, desde que suas lideranças estejam ‘a altura das necessidades do complexo mundo de hoje. Mas felizmente, após o isolamento e alinhamento automático com o *Coloso del Norte*, efetivado pela diplomacia da extrema direita neofascista brasileira ao longo dos últimos anos, a relevância do Brasil no cenário global tem sido resgatada de maneira eficiente e surpreendentemente rápida, como apontamos anteriormente.

Lula tem acima de tudo buscado manter sua autonomia e enfatizar a necessidade da coordenação de esforços e iniciativas multilaterais. Manter uma linha de equidistância dentro das disputas hegemônicas globais não será tarefa fácil. A crescente rivalidade China e EUA tem grande potencial de assumir cada vez mais contornos de conflito aberto, e o Brasil terá dificuldade para ser visto, ao mesmo tempo, como membro chave dos BRICS e assim um representante privilegiado das demandas do Sul, e interlocutor chave, histórico aliado, ou pelo menos parceiro comercial tradicional do Ocidente. Ainda assim, se conseguir se projetar como uma espécie de representante, mesmo que não oficial, da nossa região nas articulações com cada lado em disputa, o Brasil poderia talvez conseguir manter o grau de autonomia necessário para desempenhar um papel importante e há muito esperado na ordem multilateral emergente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Jalife-Rahme, Alfredo (11 de fevereiro de 2024). Bajo la lupa. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/02/07/columnas/bajo-la-lupa-4632>

Karadjis, Michael (17 de agosto de 2023). The Global South's Views on Ukraine Are More Complex Than You May Think. *New Lines Magazine*. <https://newlinesmag.com/argument/the-global-souths-views-on-ukraine-are-more-complex-than-you-may-think/>

Kupchan, Charles A. (3 de janeiro de 2023). A New Cold War Could Be Much Worse Than the One We Remember. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2023/06/cold-war-china-risks/674272/>

Stuenkel, Oliver (26 de fevereiro de 2021). Latin American Governments Are Caught in the Middle of the U.S.-China Tech War. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2021/02/26/latin-america-united-states-china-5g-technology-war/>





Boletín del Grupo de Trabajo
Estudios sobre Estados Unidos

Número 11 · Mayo 2024